

## DIAGNÓSTICO DEPARTAMENTAL CÓRDOBA



Procesado y georeferenciado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH  
Vicepresidencia de la República  
Fuente base cartográfica: Igac

### Introducción

El departamento de Córdoba con una extensión territorial de 23.980 Km<sup>2</sup>, está ubicado en la región de la Costa Atlántica, limita al norte con el mar Caribe, al occidente con el departamento de Antioquia, al oriente con Sucre y al sur con los departamentos de Antioquia y Bolívar. Se divide política y administrativamente en 30 municipios; de éstos, Tuchín y San José de Uré fueron aprobados por la Asamblea municipal en junio de 2007. Su población proyectada para 2007 es de 1.513.988 habitantes<sup>1</sup>, de los cuales 743.886 viven en las cabeceras municipales, mientras que 728.813 lo hacen en la zona rural; de los anteriores, el 76.10% de la población rural y el 42.47% de la población urbana tiene necesidades básicas insatisfechas<sup>2</sup> e indicadores tales como el desempleo y el analfabetismo son de los más altos de la Costa<sup>3</sup>. El 10.39% de los habitantes son indígenas<sup>4</sup> y el 13.21% afrocolombianos. Su capital, Montería, concentra el 26% de la población total y el PIB departamental constituye el 2.30% del PIB nacional<sup>5</sup>. A pesar de que el departamento posee yacimientos de oro, ferroníquel y carbón, ganado vacuno y cultivos agrícolas, es uno de los cinco departamentos más pobres

<sup>1</sup> Proyecciones de población de Dane, <http://www.dane.gov.co/>

<sup>2</sup> Ver: Dane, [www.dane.gov.co](http://www.dane.gov.co)

<sup>3</sup> *Los obstáculos al desarrollo de Córdoba*. Víctor Negrete. Intervención presentada en el taller Obstáculos al Desarrollo del Departamento de Córdoba. Montería, abril 20 de 2007.

<sup>4</sup> En el departamento del Córdoba, habitan 2 etnias: La Embera Katío y la Zenú repartidos en tres resguardos ubicados en tres municipios de la región. En: *Los pueblos indígenas de Colombia en el umbral del Nuevo Milenio*. [www.dnp.gov.co](http://www.dnp.gov.co).

<sup>5</sup> Ver: Gobernación de Córdoba, [www.cordoba.gov.co](http://www.cordoba.gov.co) y Dane, [www.dane.gov.co](http://www.dane.gov.co).

## Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH

del país, pues un 28% de su población se encuentra bajo la línea de indigencia y su cobertura en acueducto apenas llega a un 33%<sup>6</sup>.

El departamento se puede dividir en dos grandes regiones según su distribución geográfica: la primera<sup>7</sup>, conformada por el norte y el centro de la región, es de tierras planas, donde se localizan los valles de los ríos Sinú y San Jorge y se concentran la mayoría de los municipios. La segunda gran región<sup>8</sup> se ubica en el sur del departamento, es montañosa con relieves pertenecientes a las serranías de Abibe, San Jerónimo y Ayapel, que son prolongaciones de la cordillera occidental. Allí se encuentra el Parque Natural de Paramillo (en adelante Paramillo), reserva natural que alberga una de las mayores concentraciones de fauna y flora nativa del norte de Suramérica y donde nacen los ríos Sinú y San Jorge.

El sistema hidrográfico de Córdoba está compuesto por zonas marcadas por los dos ríos principales que atraviesan el departamento de sur a norte: la zona del Valle del Sinú recoge los afluentes del sur como los ríos Verde, Esmeralda y Manso y la zona del Valle del San Jorge canaliza los ríos Canalete y Mangle, al noroeste del departamento para luego desembocar en el río Cauca, que a su vez converge con el río Magdalena a la altura de la Depresión Momposina. Además, se calcula en 110.000 hectáreas la superficie permanente de las ciénagas, siendo las más importantes las de Ayapel, Grande de Lorica y Betancí y en el municipio de Tierralta está ubicada la hidroeléctrica Urrá I, una de las más grandes de Latinoamérica y a futuro el proyecto Urrá II.

El departamento posee varios corredores estratégicos: entre el Paramillo y el Urabá antioqueño, entre Ayapel y el sur de Bolívar y de este municipio y La Apartada con el Urabá chocoano y antioqueño; entre San Andrés de Sotavento y Chinú y los Montes de María, así como entre el Alto San Jorge y el Alto Sinú (donde se ubican Valencia, Tierralta, Puerto Libertador y Montelíbano) y las zonas costaneras, (especialmente Canalete, Los Córdoba y la zona rural de Montería<sup>9</sup>), rutas que convierten a Córdoba en una región estratégica para los grupos armados ilegales.

En este sentido, es de especial relevancia la zona de Paramillo al sur, que durante el período colonial sirvió de refugio a reductos de las etnias Zenú y a negros fugados de las minas de oro del Bajo Cauca antioqueño, así como a los indígenas Embera Katío procedentes de Chocó. Para 1950, se surtió una segunda colonización, de tipo agrícola costeña y antioqueña y a partir de ahí, con la disputa de los partidos liberal y conservador, se convirtió en escenario de confrontación, donde fuerzas externas llegaban, desalojaban a los moradores anteriores y hacían su propio repoblamiento<sup>10</sup>. Dicha zona ha

---

<sup>6</sup> *Los obstáculos al desarrollo de Córdoba*. Op.cit.

<sup>7</sup> Para efecto de este diagnóstico, los municipios que la conforman son: Tuchín, San José de Uré, Ayapel, Buenavista, Canalete, Cereté, Ciénaga de Oro, Cotorra, Chimá, Chinú, La Apartada, Lorica, Los Córdoba, Momil, Montería, Moñitos, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Puerto Escondido, Purísima, Sahagún, San Andrés de Sotavento, San Antero, San Bernardo del Viento, San Carlos y San Pelayo.

<sup>8</sup> Para efecto de este diagnóstico, los municipios que la conforman son: Puerto Libertador, Montelíbano, Valencia y Tierralta.

<sup>9</sup> *Informe de Córdoba*. Comisión ciudadana de reconciliación. Universidad del Sinú. Centro de estudios sociales y políticos. Cartagena, 18 y 19 de Julio de 2007.

<sup>10</sup> *Parque Nacional Natural de Paramillo*. En: Revista En busca del desarrollo. Víctor Negrete Editor. Montería, 1992.

## Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH

vivido al ritmo de las constantes luchas territoriales entre los grupos insurgentes (Farc, ELN, ERP y EPL), de las autodefensas (Accu y AUC) y en los últimos años de bandas criminales emergentes (Los *Traquetos* y los *Vencedores de San Jorge* en un primer ciclo y los *Paisas* y la bandas de *Don Mario* en el ciclo actual), constituyéndose en un codiciado corredor estratégico que comunica al Urabá con el interior del país. Además, es un área propicia para la siembra de cultivos de coca (385.3 hectáreas en 2002, tras su disminución desde 1999 a raíz de la fumigación de cultivos contemplada dentro del Plan Colombia), el transporte de drogas ilícitas e insumos para su procesamiento<sup>11</sup>, el tráfico de armas y el establecimiento de retaguardias para los grupos armados. De igual manera, ha sido escenario de agudos conflictos de tierras entre campesinos desposeídos y grandes hacendados ganaderos<sup>12</sup>.

En la época de la Violencia, la pugna entre conservadores y liberales dio origen a guerrillas liberales lideradas por Mariano Sandón, en el río Sinú, y Julio Guerra, en el río San Jorge, como respuesta a la expulsión de sus tierras que sufrieron los campesinos por parte de líderes conservadores; dichas estructuras se desarmaron durante la amnistía de Gustavo Rojas Pinilla en 1953. Sin embargo, las tierras prometidas nunca fueron entregadas y los hombres de Guerra se organizaron nuevamente y asumieron las luchas agrarias de comienzos de los sesenta, integrando las filas del EPL. Por su parte, Sandón, quien había sido nombrado corregidor de Batatas (Tierralta) fue asesinado en 1972<sup>13</sup>.

En 1967, el EPL escogió al Paramillo como centro de despliegue de sus acciones armadas; el sur de Córdoba se convirtió desde entonces hasta inicios de los ochenta en su escenario de expansión. Tras la creación en 1977 de la zona de Paramillo como parque nacional, la Brigada XI del Ejército Nacional desarrolló una campaña contra dicha guerrilla; es así como en 1991, el EPL se desmovilizó y las Farc y las autodefensas empezaron a ocupar sus zonas de influencia (Urabá, Planeta Rica y Puerto Libertador).

De otro lado, las Farc, tras su VII Conferencia en 1982, replantearon sus objetivos políticos, con la expansión de su presencia en regiones del país de significación económica y/o geopolítica. Por ello, en 1984 impulsaron en el Paramillo los primeros cultivos de coca y entre 1993 y 1995, tras la desmovilización del EPL<sup>14</sup>, empezaron a incursionar en la región, desdoblando unos frentes del bloque José María Córdoba y creando los frentes 57, 58, 18 y columnas móviles. Su acción militar se enmarcó dentro de una lucha constante con las autodefensas por el acceso al Urabá antioqueño. Sin embargo, su estrategia ha sido similar, pues en sus incursiones han dado muerte a personas consideradas redes de apoyo de su contrincante, como

---

<sup>11</sup> Según informaciones de las autoridades, los grupos armados y narcotraficantes utilizan lanchas rápidas a través del Pacífico para realizar este tráfico. *Informe de Córdoba*. Ob.cit.

<sup>12</sup> Desde finales del siglo XVIII prevalece un modelo de desarrollo basado en la ganadería extensiva: para 2005, el área destinada a la ganadería era de 1.640.000 has, lo que significa el 65.5% del área total del departamento. Datos de la Federación Ganadera de Córdoba En: *Los obstáculos al desarrollo de Córdoba*. Op.cit.

<sup>13</sup> *Lo que hay tras la crisis en Tierralta*. El Espectador. 10 Julio 2006

<sup>14</sup> Reductos del EPL que no dejaron las armas y aquellos que lo hicieron en su mayoría fueron víctimas de homicidios selectivos por parte de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar.

## Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH

sucedió en Juan José, Batatas, Pueblo Bello y Valencia<sup>15</sup>. Después de 2005, comenzaron a incrementar su presencia en el área en el marco de las negociaciones entre el Gobierno y las autodefensas, pretendiendo ocupar las zonas dejadas por estas estructuras, y enfrentándose a las bandas criminales, que surgieron con el mismo objetivo.

En la actualidad, esta guerrilla actúa a través del bloque Noroccidental y de de 4 frentes principalmente: el frente 5, que tienen presencia en Tierralta, ríos Esmeralda y Verde; el frente 18, que hace presencia en el área de Tierralta, río San Jorge y Llanos del Tigre; el frente 36 en Puerto Libertador, Montelíbano y riberas de los ríos San Jorge y río Sucio; el frente 58, que delinque en Tierralta, riberas del río Esmeralda, en Batatas, La Resbalosa, Río Verde, Guadual, Alto Joaquín, en el suroccidente del municipio de Tierralta. Adicionalmente, tiene presencia la columna móvil Mario Vélez, actuando sobre las riberas de los ríos Sinú y Esmeralda al sur de Tierralta y la compañía Manuel Cepeda Vargas, en el sector del Achote, comunidad indígena de Pita y en el río Esmeralda, también en Tierralta. Con respecto a las otras guerrillas, el ELN tiene en la zona caribe el frente de Guerra Norte y a pesar de que hacía presencia en la mina de Cerro Matoso con el frente Astolfo González en los años noventa, su presencia actualmente es marginal.

A su vez, los grupos de autodefensa consolidaron en este departamento una de sus áreas de más fuerte influencia a nivel nacional. A raíz de la presencia del EPL en el Paramillo, surgió un factor de presión sobre la zona bananera del Urabá antioqueño y la región ganadera del sur de Bolívar y Córdoba. Como consecuencia, y sumado al interés de ampliación y consolidación de dominios territoriales de los terratenientes tradicionales, surgió en Saiza (Tierralta) en los setenta, una junta de hacendados y ganaderos que organizaron los primeros grupos de defensa privada, primer antecedente de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (en adelante Accu), comandados por Fidel y Carlos Castaño, conocidos entonces como *Los Magníficos*, que aparecieron en la primera mitad de la década de los ochenta.

A partir de 1988, las autodefensas comienzan su expansión desde el Magdalena Medio, nordeste de Antioquia y sur de Córdoba, hacia otras regiones, como Sucre, el Urabá y el Bajo Cauca antioqueño. En Tierralta, las Accu empezaron a perfilarse como la nueva estructura preponderante dentro de las autodefensas y en 1990 era el grupo de mayor crecimiento, contrariamente a lo que estaba sucediendo en Caquetá, Putumayo y Meta. Sin embargo, el Gobierno logró que paralelamente a la desmovilización del EPL, Fidel Castaño aceptara la desmovilización de sus hombres en 1991 en la finca Las Tangas en el Alto Sinú, quien además distribuyó cerca de 16.000 hectáreas de tierra a campesinos y organizó la Fundación por la Paz de Córdoba (Funpazcor), que ofreció asistencia técnica y financiera a más de 2.500 familias<sup>16</sup>, lo que significó para la familia Castaño y sus asociados influencia política en la región y la expansión de su poderío<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> *El conflicto armado colombiano en los años noventa: cambios en las estrategias y efectos económicos*. Camilo Echandía Castillo. En: Colombia Internacional 49-50, Bogotá 2000.

<sup>16</sup> *Paramilitares y Autodefensas, 1982-2003*. Mauricio Romero. Bogotá, 2003.

<sup>17</sup> Sobre los hechos que han sido parte de la investigación sobre Funpazcor: *Vicente Castaño está detrás del crimen de activista: Fiscalía*. En: El espectador, 12 de febrero de 2007.

## Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH

Sin embargo, a partir de 1993 los grupos de autodefensa comenzaron a crecer nuevamente, pues las Farc y el ELN intentaron ocupar la mayor parte del territorio que antes dominaban estas estructuras. Ante esta situación, los Castaño volvieron a la clandestinidad e irrumpieron en el eje ganadero de Urabá en 1994, año en el que presuntamente murió Fidel; a partir de ese año, su hermano Carlos comenzó a consolidar su poder en el valle del Alto Sinú y en el cinturón bananero de Urabá, organizando las Accu, con el fin de combatir a la guerrilla e impedir la consolidación de la Unión Patriótica como principal fuerza electoral de la región.

Se inició entonces un proceso de expansión de las Accu, conocidas en ese entonces como los *Mochacabezas*, *Los Colimocha*, *Los Chalises*, *Los Tangueros* o *Los Masetos*. Posteriormente en 1996, las Accu se expandieron a Sucre, Bolívar, Magdalena y Cesar y en 1997 y 1998 a Meta, Guaviare, Nordeste antioqueño, Chocó, Casanare, La Guajira, sur de Bolívar, Oriente antioqueño, Putumayo y Caquetá. En abril de 1997, las Accu convocaron a dirigentes y líderes de diferentes organizaciones de autodefensa para la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia (en adelante AUC), como una federación de grupos independientes, cuyo estado mayor era integrado por siete miembros liderados por Carlos Castaño y repartidos en frentes localizados en Antioquia, Chocó y Córdoba, Magdalena Medio, Cesar y Santanderes, Casanare, Meta, Cundinamarca, Tolima, Huila, Caquetá, Guaviare y Putumayo<sup>18</sup>.

En el departamento, las acciones de las AUC se desplegaron a través de 4 bloques: el bloque Córdoba, encabezado por Salvatore Mancuso, con presencia en todo el departamento;<sup>19</sup> el bloque Héroes de Tolová, dirigido por Diego Murillo alias *Don Berna*, con centro de acción en Valencia; el bloque Mineros, al mando de alias *Cuco Vanoy* actuando en Puerto Libertador, Montelíbano, La Apartada y Ayapel y el bloque Élmer Cárdenas, coordinado por alias *el Alemán*, actuando en los municipios de Canalete, Los Córdoba, Arboletes y San Juan de Urabá<sup>20</sup>.

Es así como la dinámica de la confrontación armada en la región en la década de los noventa estuvo caracterizada por las siguientes dinámicas: entre 1993 a 1995, se identificaba la presencia de las Farc en Tierralta, Montelíbano, Planeta Rica, Valencia y Puerto Libertador; a partir de 1996, éstas se desplazaron por presión de las Accu, hacia Sucre y el Norte y Bajo Cauca antioqueño. Entre 1997 y 2001, las Farc llevaron a cabo una *contraofensiva* contra las Accu en el Paramillo, en Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador, llegando en 1998 a incursionar en la base de Tolová, cuartel principal de Carlos Castaño.

Por lo anterior, desde 1999 las Accu emprendieron una estrategia de tipo "tenaza" para repeler las hostilidades y las Farc lograron dominio en Juan José, La Rica y Puerto López, en Puerto Libertador y Montelíbano. Las

---

<sup>18</sup> *Carlos Castaño: Mi confesión*. Mauricio Aranguren. Bogotá, 2001.

<sup>19</sup> Salvatore Mancuso es miembro de una adinerada familia de inmigrantes italianos. Después de haber sido secuestrado por el Epl, estableció una cooperativa de seguridad y más adelante se convirtió en jefe de las Accu. *Paramilitares y Autodefensas, 1982-2003*. Op. cit En: *Los nuevos grupos armados de Colombia*. International Crisis Group. Informe sobre América Latina No 20. Mayo 2007.

<sup>20</sup> *Córdoba: Antes y después de Ralito*. En: Documentos para la reflexión No 2, Grupos Políticos, iglesias y conflicto armado. Universidad del Sinú. Febrero de 2007.

## Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH

autodefensas por su parte ejercieron presión sobre los municipios de Toledo, Cañasgordas, Giraldo, Ituango y Buriticá; a partir de 1999 trataron de expandirse y recuperar algunas zonas, objetivo fallido pues en 2001 perdieron dominio sobre Tarazá, Puerto Libertador, Montelíbano, Tierralta, Briceño, Urama y Buriticá, que se convirtieron en municipios en disputa.

En cuanto a la presencia institucional, se debe resaltar que el Ejército Nacional tiene ubicadas en Montería a las Brigadas XVII y XI, al Batallón de Infantería Junín, al Batallón Contraguerrillas No. 10 y a un Gaula, con jurisdicción en todo el departamento, así como al Batallón de Infantería Rifles en Ayapel. Además, todos los municipios cuentan con presencia de la Policía.

Los combates entre la Fuerza Pública y los grupos armados ilegales empezaron a manifestarse con más énfasis en 2003 y se incrementaron en 2004, con la inauguración de la operación *Motilón*, dirigida contra los frentes 18 y 34 de las Farc y que arrojó como resultados entre otros, la entrega de 21 de sus integrantes<sup>21</sup>. Actualmente, el área estratégica de operaciones de la Fuerza Pública está conformada por el Paramillo, Alto Sinú, Alto San Jorge, Bajo Cauca antioqueño y Mojana sucreña, en la cual se han desarrollado operaciones como la *Escorpión*, que tiene como objetivos a los frentes 5, 18 y 58 de las Farc, así como a los narcotraficantes y nuevas bandas emergentes, que se ubican en la zona de Bocas del Manso, Juan José, Tierradentro, Tres Playitas y Llanos del Tigre, cuyo fin es controlar los corredores de movilidad utilizados para comercializar la coca (ríos Sinú, Esmeralda y San Jorge). Por otra parte, la operación *Fortaleza* tiene como fin erradicar la coca cultivada en los ríos Manso y Tigre (veredas Yupe, Yupegrande y Llanos del Tigre) y en las veredas Alto Mira, Saltillo, Casa de Zinc, entre otras y la operación *Audaz* adelantada contra las bandas criminales busca controlar las rutas de comercio en los municipios de Tierralta, Valencia y en general la zona costanera<sup>22</sup>. Por otro lado, se desarrolla en el norte la operación *Soberanía*, sobre las troncales Caribe y Occidente que atraviesan el departamento. Finalmente, se han establecido acciones de erradicación manual y aspersión que según datos de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional han arrojado como resultados en 2007 un total de 6.259 hectáreas asperjadas con cultivos de coca y 3.141 hectáreas erradicadas en los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador, Valencia y Tierralta.

Ahora bien, en noviembre de 2002 en Tierralta, el Gobierno nacional y las AUC iniciaron negociaciones de paz y en mayo de 2004 acordaron la creación de una zona de ubicación (en adelante ZU), con el fin de facilitar la consolidación de un proceso de paz, que entró en vigencia el 1 de julio de 2004, a través de la Ley 782 de 2002. Los corregimientos que integraron dicha zona fueron El Caramelo, Santa Fé de Ralito, Bonito Viento, Nueva Granada, Santa Marta y Palmira, con una extensión de 368 km<sup>2</sup> - lo que representa el 7% de la extensión total del municipio<sup>23</sup> -, cuya vigencia llegó hasta el 31 de diciembre de 2005, dando paso al proceso de reincorporación

---

<sup>21</sup> Colombia: *Balance de seguridad 2001-2003*. Informe Fundación Seguridad y Democracia. 2004

<sup>22</sup> Acta del Consejo de Seguridad Ambiental sobre el Parque Nacional Natural Paramillo y su zona aledaña en la jurisdicción del departamento de Córdoba (municipios de Tierralta, Puerto Libertador y Montelíbano). Sala de guerra de la XI Brigada-Montería. 18 de junio de 2008

<sup>23</sup> Defensoría del Pueblo, IR No. 043-05.

## Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH

a la vida civil de cerca de 31.671 combatientes mediante desmovilización colectiva<sup>24</sup>.

En diciembre de 2004, se dio inicio a la desmovilización del denominado bloque Norte de las AUC, que poseía frentes en Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, La Guajira y Cesar con sucesivas desmovilizaciones hasta marzo de 2006. En lo que respecta a Córdoba, en enero de 2005 se desmovilizaron 925 hombres pertenecientes al bloque Córdoba en Santa Fé de Ralito (Tierralta); en junio del mismo año, 464 hombres del bloque Héroes de Tolová dejaron sus armas en la vereda Rusia Ocho (Valencia); en enero de 2006, 2.789 hombres del bloque Minero lo hicieron en Tarazá (Antioquia) y finalmente 793 hombres del bloque Élmer Cárdenas en abril de dicho año en Unguía (Chocó)<sup>25</sup>.

Sin embargo, las regiones abandonadas por las AUC se convirtieron en escenarios de competencia entre la guerrilla, narcotraficantes y nuevos actores ilegales denominadas por las autoridades bandas criminales emergentes. Dichas bandas han reeditado las prácticas extorsivas de las antiguas autodefensas y han llevado a cabo principalmente en Montería y Valencia, reclutamiento forzado de antiguos integrantes de estos grupos<sup>26</sup>. Es así como a principios de 2007, se lograron identificar dos bandas criminales emergentes, que en un primer momento se ubicaron en Tierralta y Montelíbano<sup>27</sup>.

La primera fue una disidencia del bloque Héroes de Tolová, llamada *los Traquetos*, al mando de alias *Mister*, después de la captura de alias *Cobra*<sup>28</sup>, que actuó en Valencia y Tierralta; existen hipótesis que indican que su objetivo era entablar una confrontación con los desmovilizados del bloque Córdoba por las tierras que fueron dominio de Salvatore Mancuso, donde también estarían también implicados *el Alemán* y *Jorge 40*<sup>29</sup>. La segunda fue la llamada *Vencedores de San Jorge*, disidencia del bloque Alto Sinú y San Jorge, llamados "grupo delta", al mando de alias *Niñito* y *Flaco*<sup>30</sup>, que tuvo presencia en la vereda Playa Rica del corregimiento Tierradentro, hasta la vereda El Palmar en el San Jorge, en Puerto Libertador y Montelíbano; sobre esta estructura se supo que luego de hacer pública su existencia en febrero de 2006, se retiraron del área bajando su perfil; no obstante, aparecieron 10 meses más tarde bajo el nombre de *Águilas Negras*. El reclutamiento en la zona fue muy visible y se habla de hombres que llegaron de Caucasia (antiguos integrantes del bloque Central Bolívar)<sup>31</sup>.

<sup>24</sup> Cifras a 2006, fecha en la que ocurrió la última desmovilización colectiva: [http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/web/desmovilizaciones/2004/index\\_resumen.htm](http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/web/desmovilizaciones/2004/index_resumen.htm)

<sup>25</sup> Ver: [www.altocomisionadoparalapaz.gov.co](http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co).

<sup>26</sup> *La seguridad en Colombia. Los retos del éxito*. Román Ortiz. Real Instituto Encano. Bogotá, 2007.

<sup>27</sup> *Octavo Informe Misión de verificación*. Misión MAPP- OEA. Febrero 14 2007.

<sup>28</sup> *Se calcula que hay entre 30 y 60 'bandas emergentes' surgidas de los grupos 'paras' desmovilizados*. El Tiempo 10 de Diciembre de 2006.

<sup>29</sup> Entre los logros destacados por las Fuerzas Militares en el primer semestre del 2007, se encontró la detención del jefe de esta banda Albeiro Gómez alias *Cobra* a mediados del año pasado. En: *Vicente Castaño: muerto*. Revista Cambio 740. Septiembre 2007 y *Comunicado sobre la presencia en el territorio nacional de bandas criminales dedicadas al ilícito del narcotráfico*. Ministerio de Defensa. Julio 16 2007

<sup>30</sup> *Se calcula que hay entre 30 y 60 'bandas emergentes' surgidas de los grupos 'paras' desmovilizados*. Ob.cit.

<sup>31</sup> *Noveno Informe Misión de verificación*. Misión MAPP- OEA. Julio 3 2007.

## Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH

Posteriormente en el transcurso de 2007, se presentó una mutación de dichas bandas y surgieron en el panorama de la confrontación dos nuevas estructuras criminales: *Los Paisas* y las denominadas *Héroes de Castaño* o *Águilas Negras de Urabá*; la primera, al parecer, una disidencia del bloque San Jorge de las autodefensas que tiene como área de influencia a los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador, Buenavista, Planeta Rica, Montería, Valencia y Tierralta y las segundas al mando de Daniel Rendón alias *Don Mario*, que tiene presencia en una amplia zona que corresponde con el área de influencia del desmovilizado frente Elmer Cárdenas y por tanto su influencia se extiende desde los municipios del sur de Córdoba hasta Chigorodó, incluyendo el municipio de Montería<sup>32</sup>.

Al respecto, se debe resaltar que *Don Mario* es el hermano de Freddy Rendón *el Alemán* - quien comandaba grupos de autodefensa en Urabá - y fue hombre de confianza de Vicente Castaño. Sin embargo, nunca se desmovilizó y después de estar en Los Llanos Orientales, volvió nuevamente a Urabá en 2004, donde se dedicó al narcotráfico y se alió con alias *Macaco* y con Wílber Varela, con el propósito de frenar la expansión de *los Mellizos*<sup>33</sup> en Urabá y apropiarse de los mercados asociados al narcotráfico que antes manejaban Salvatore Mancuso, *Don Berna* y Ramiro *Cuco* Vanoy. Su accionar ha estado marcado por el asesinato de desmovilizados que estuvieron al servicio de esos tres ex-integrantes de las autodefensas, que participaron o comulgaron con el asesinato de Carlos Castaño, y por la disputa con la banda *Los Paisas*, que tienen un vínculo muy estrecho con la denominada *Oficina de Envigado*. Su intención según los informes de inteligencia es establecer un corredor entre el Urabá, el alto Sinú y el Nordeste antioqueño, que busca controlar las salidas al mar, en la Costa Atlántica y Urabá. En la actualidad, tiene una fuerte presencia en Valencia, Tierralta y San Pedro de Urabá y se calcula que tiene bajo su mando a una estructura de 600 hombres. Frente a estos hechos, la persecución contra la denominada Bacrim No. 21 de Urabá se ha hecho más intensa y se crearon en el mes de julio de 2008 2 grupos élite que integran miembros de la Policía, Ejército, CTI, Das y de la Fiscalía, para lograr la captura de *Don Mario* y se ofreció una millonaria recompensa para quienes revelen su paradero<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> Acta del Consejo de Seguridad Ambiental. Idem.

<sup>33</sup> Los hermanos Miguel Ángel y Víctor Mejía Múnera, los Mellizos, eran dos reconocidos jefes mafiosos que habían logrado camuflarse durante tres años como paramilitares llegando a ser incluso parte del grupo de negociadores en Ralito. Disidentes del proceso junto a Vicente Castaño, optaron por el camino del rearme y por copar los territorios que habían dejado libres los otros paras entre ellos el Golfo de Urabá, con Don Mario. En mayo de 2008 uno de ellos fué abatido por la Policía y tres días más tarde su hermano fue capturado.

<sup>34</sup> En: Según un testigo, las "Águilas Negras" son las nuevas AUC más militarizadas. En: El Espectador, 30 de junio de 2007; ¿Qué son las Águilas Negras? En: semana.com, agosto 18 de 2007; Pasos de animal grande. En: semana, febrero 9 de 2008; 46 muertos deja la guerra por el control de la coca en Córdoba. En: El Tiempo, febrero 1 de 2008; 'Don Mario', narco ligado a los hermanos Castaño, es ahora el capo más buscado del país. En: El Tiempo. Febrero 8 de 2008; 'Don Mario', el narco que quiere vengar el asesinato de Carlos Castaño. En: Urgente 24. 9 de febrero de 2008; Matan hermano acusado traficante en guerra de drogas en Colombia. En: Reuters, 19 de febrero de 2008; El nudo que rodea al Paramillo. En: Semana, febrero 26 de 2008. Vendettas y rearme. Editorial En: El Tiempo 10 de agosto de 2008. Guerra De Bandas Ex 'Paras' Desangra a 7 Departamentos. En: El Tiempo, 28 de Julio de 2008; Homicidios aumentaron en un 127%. En: El Universal, 29 de septiembre de 2008; Neoparamilitares o bandas de narcos. En: Semana septiembre 5 de 2008; Neoparamilitarismo y nuevas masacres. Boletín No 29: Serie sobre los derechos de las víctimas y la aplicación de la Ley 975. Comisión Colombiana de Juristas. 3 de septiembre de 2008.

## Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH

Por otra parte, debe anotarse que en el segundo semestre de 2008, aparecieron entre comerciantes y pobladores de Tierralta varios panfletos firmados por un grupo que se autodenominó *Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)*. Los panfletos anunciaban la llegada del nuevo grupo armado a la zona con la supuesta intención de combatir a la guerrilla y que pretende retomar el control después de la desmovilización de las autodefensas. Además de los panfletos, algunos dueños de almacenes en Tierralta recibieron llamadas de desconocidos que les ordenaban cerrar sus locales<sup>35</sup>.

Para finalizar, debe anotarse que el panorama del departamento está marcado actualmente por dos problemáticas adicionales: la de los desmovilizados y la de las víctimas de los actores armados presentes en la zona. En cuanto a la primera, se debe considerar que al departamento no llegaron únicamente los ex-combatientes oriundos de la región, sino también aquellos provenientes de otras zonas como el Catatumbo y el Urabá, haciendo de Córdoba el mayor receptor de esta población - después de Antioquia -, con 3.749 hombres y mujeres para julio de 2007<sup>36</sup>. Sobre el particular, vale la pena resaltar que las expectativas generadas por la extensión de la ayuda humanitaria - derivada del Decreto 395 - ocasionaron un efecto negativo en algunas zonas por el no pago o por la suspensión de la ayuda humanitaria y posteriormente se empezaron a presentar denuncias acerca de casos de reclutamiento, que generó una alta movilidad de esta población desde la Sierra Nevada, los Llanos Orientales y del Bajo Cauca antioqueño hacia el sur de Córdoba a partir de la primera mitad de 2007<sup>37</sup>. En este sentido, para los desmovilizados, la falta de oportunidades laborales combinada con los riesgos en materia de seguridad, puede ser un incentivo para tomar la decisión de volver a delinquir, no sólo para conseguir ingresos sino también para proteger su vida.

Paralelamente a esta problemática, se encuentran las víctimas de la confrontación armada. Es tal el número de afectados en el departamento que las víctimas a octubre del año pasado formulaban cerca de 18 denuncias diarias<sup>38</sup>. En el caso del CTI de Montería, se tramitaron 1.393 denuncias en 2006 y el Comité Civil de Familiares, Víctimas, Reconciliación y Paz de Córdoba (Comfavic) recientemente envió otras 903, las cuáles provenían en su mayoría de Tierralta y Valencia, por casos de homicidio y desaparición

---

<sup>35</sup> En: Asesinan a presidente de Junta de Acción Comunal de vereda de Córdoba. En: El Tiempo 22 de octubre de 2008. Según los informes de inteligencia

<sup>36</sup> Para abril de 2007, 3.608 desmovilizados habían sido atendidos a nivel institucional, de los cuales, 3.376 se ubicaban en los municipios de Montería, Tierralta, Valencia, Montelíbano, Planeta Rica, Cereté, Lórica, Ciénaga de Oro, La Apartada, Sahagún, y Puerto Libertador, en su mayoría zonas críticas y de los cuales, 1.015 tenía trabajo, donde se incluía la variable informal que no constituye para el Dane una fuente de ingreso confiable. Respecto de esta población, la mayoría reseñada eran jóvenes entre 18 y 26 años, que vivían en las cabeceras municipales y en Montería, con bachillerato, pero desempleados que laboraban ocasionalmente o aprendían algún oficio. La mayoría de desmovilizados se ubicaron en Montería, donde en asentamientos subnormales y populares vive el 70% de sus habitantes con altos índices de desempleo y presencia de pandillas. En: Cifras del centro de orientación y recepción de Córdoba. En: Informe de Córdoba. Ob.cit y Los Desmovilizados De Base: ¿Cuál Es El Futuro? En: Documentos Para La Reflexión. Distintos aspectos sobre El Proceso De Negociación Gobierno- Auc. Centro de Estudios Sociales y Políticos. Montería, 2005.

<sup>37</sup> *Noveno Informe Misión de verificación*. Op.cit.

<sup>38</sup> *18 denuncias diarias contra paramilitares en Colombia*. En: El Diario La Prensa Online Octubre 28 2006. En: [www.cnrr.org.co](http://www.cnrr.org.co)

## Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH

forzada en contra de agricultores, donde el 79.7% señalaban como autores a grupos de autodefensas<sup>39</sup> y que fueron perpetrados en la década de los noventa (60%). En lo que respecta a las declaraciones de la Ley de Justicia y Paz, la Fiscalía el año pasado poseía un total de 188 declaraciones, la Procuraduría 16, la Defensoría del Pueblo 140 y la Personería de Montería 55, mientras que Comfavic tenía inscritas cerca de 3.000 personas<sup>40</sup>. Ante tal escenario, dentro de las indagatorias de los líderes de las autodefensas, el otrora jefe del bloque Córdoba Salvatore Mancuso, realizó antes de su extradición una relación detallada de 334 asesinatos que fueron asumidos como responsabilidad colectiva de las estructuras bajo su mando, pero que no ha permitido hasta ahora establecer una responsabilidad penal individual<sup>41</sup>. De otro lado, se dio inicio en el año pasado a la tarea de exhumación, que arrojó resultados como la entrega de restos óseos de personas a 19 familias de Tierradentro (Montelíbano) por parte del Fiscal General de la Nación<sup>42</sup>.

Se presenta a continuación un panorama general de la situación de derechos humanos en el departamento de Córdoba entre los años 2003 y 2007, en cuanto a las tendencias del homicidio, masacre, secuestro, desplazamiento forzado y uso de minas antipersonal. Por último, se presentará una comparación entre la situación de derechos humanos en el primer semestre de los años 2007 y 2008.

### *Homicidio*

Pese a que en Córdoba se han presentaron picos en la tasa de homicidio por 100.000 habitantes (hpch) en 1990, 1996 y 2000, en el periodo considerado, la tasa departamental no supera la nacional. A su vez, estos altos niveles corresponden a sucesos que pueden ser identificados, pues 1990 coincide con la *ofensiva* de las autodefensas contra el EPL; en 1996 da cuenta del enfrentamiento entre las autodefensas y las Farc en Tierralta, buscando vulnerar la retaguardia de la guerrilla y extenderse hacia Urabá, y el aumento de la tasa en 2000 se enmarca dentro la estrategia de las Farc de atacar las bases de las autodefensas.

---

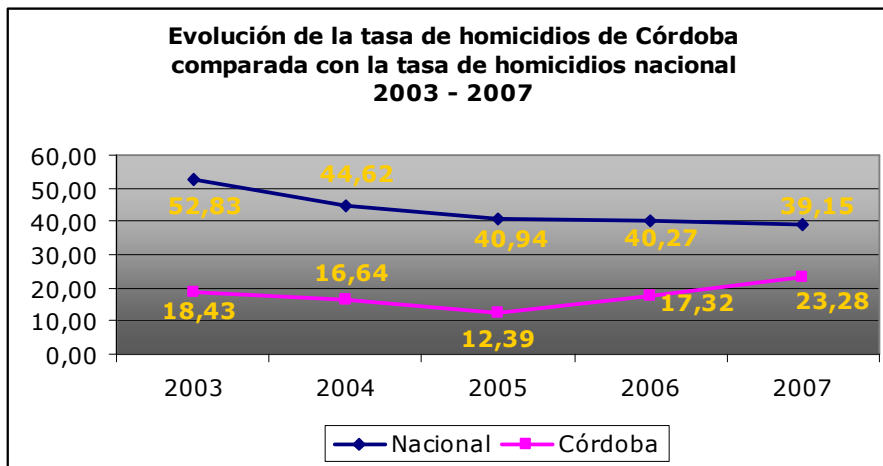
<sup>39</sup> Estadísticas aportadas por la Fiscalía General de la Nación seccional Montería.

<sup>40</sup> *Informe de Córdoba*. Ob.cit.

<sup>41</sup> *El top 10 de las confesiones*. Revista Cambio 734. Julio 2007.

<sup>42</sup> *Fosas comunes en Tierradentro Montelíbano*. El meridiano de Córdoba Septiembre 2007 y El Tiempo. Septiembre 11 de 2007.

## Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH



Fuente: Policía Nacional

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República

Al observar el quinquenio considerado en este estudio, se evidencia una tendencia ascendente en la tasa<sup>43</sup> desde 2005, alcanzando su nivel más alto en 2007, a pesar de mantenerse por debajo del nivel nacional, en particular por la dinámica presentada en el sur del departamento.

A nivel municipal, se puede anotar que en 2003, San Antero y San Carlos se ubicaron por encima del promedio nacional, Buenavista lo hizo en 2004 y en 2005 Tierralta y Puerto Libertador excedieron dicha tasa. Para 2006, el número de municipios que superaban la tasa departamental era de 10, promedio constante en el período estudiado (en 2003 fueron 12, 13 en 2004 y 11 en 2005); no obstante, en dicho año 5 municipios superan la tasa nacional: Tierralta, Puerto Libertador, Montelíbano, Los Córdoba y Canalete. En 2007, aunque los municipios que superaron la tasa departamental se redujeron a 7, Tierralta, Puerto Libertador y Montelíbano continuaron siendo los municipios que superaron el promedio nacional durante tres años consecutivos para los dos primeros y dos años sucesivos para el último.

Adicionalmente, las mayores tasas de homicidio se han registrado en municipios de gran interés estratégico: San Carlos limita con la capital del departamento, San Antero está cerca al Golfo de Morrosquillo, Buenavista está rodeado por el río San Jorge, Los Córdoba y Canalete pertenecen a la región costanera del departamento y son contiguos al Urabá antioqueño – el principal responsable de los homicidios en ambos municipios fue el bloque Élder Cardenas- y Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador hacen parte del Paramillo, donde se encuentran ubicados cultivos de coca protegidos por los grupos subversivos, corredores disputados entre actores armados ilegales y donde se impusieron lealtades a sangre y fuego a los desmovilizados de los bloques Córdoba, Mineros y Héroes de Tolová por nuevas bandas emergentes que hicieron su aparición en la región, al finalizar 2006.

En valores absolutos, entre 2003 y 2007, se han presentado en Córdoba 1.265 homicidios, de los cuales el 80% fue cometido con arma de fuego, el

<sup>43</sup> Las tasas de homicidio entre 2003 y 2005 fueron calculadas con base en las proyecciones del censo del Dane de 1993, mientras que los promedios para 2006 y 2007 fueron calculados con base en las proyecciones realizadas por el Dane a partir del nuevo censo realizado en 2005.

## Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH

14% con arma blanca y el 6% restante con armas contundentes o de otro tipo. En cuanto a las modalidades empleadas, el 7% de las víctimas fueron ocasionadas en medio de la confrontación armada, el 60% por causas y actores vinculados a la delincuencia, dentro del cuál se encuentra el accionar de nuevas bandas emergentes y el 33% restante por otras causas, lo que indica en cierta medida, aspectos claves en el panorama actual de la tendencia en los homicidios en el departamento. A lo anterior, se debe añadir que de las víctimas sobre las cuáles se tiene información, el sector más afectado fue el agricultor y ganadero, el primero representa el 10% con 131 registros y el segundo el 8%, con 103 hechos fatales. Sin embargo, el 76% del total pertenece a 958 casos en donde la víctima realizaba otras actividades no estipuladas, entre las que se puede encontrar la categoría de desmovilizados, quienes entre 2006 y 2007 arrojaron un total de 25 víctimas con 7 registros en 2006 y 18 en 2007, de los cuales el 48% ocurrieron en Tierralta y el 32% en la capital departamental<sup>44</sup>.

Al comparar el período 2003-2007, se observa que nuevamente la capital departamental y los municipios de Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador se encuentran entre los primeros lugares donde se registraron los hechos, las víctimas y las modalidades descritas<sup>45</sup>. Estos incrementos están relacionados con el accionar de bandas criminales que en 2006 y 2007 eran *Los Traquetos* y *Vencedores de San Jorge*, quienes después se hicieron llamar *Águilas Negras*. Ambas bandas ocuparon los espacios dejados por las autodefensas tras su desmovilización y se apoderaron de los negocios ilegales como la producción y comercialización de la coca. Actualmente, la banda de *Los Paisas* y de alias *Don Mario* se estarían disputando el control del negocio.

A su vez, Montería presenta un repunte en sus cifras de homicidios, debido al aumento de acciones atribuidas a la delincuencia común en la capital y al incremento desmedido de muertes por sicariato, modalidad que en el departamento ha alcanzado niveles alarmantes; al respecto cabe anotar que la capital departamental es el municipio donde se ha registrado históricamente la mayoría de estos hechos con un total de 200 registros entre 2003 y 2007. Sin embargo, se debe resaltar que mientras que en 2006 no se presentó ningún hecho con este modus operandi en todo el departamento, para 2007 se habían presentado 55 casos en Montería, 75 en Tierralta, 59 en Montelíbano, 33 en Puerto Libertador y acaecieron hechos en zonas que históricamente no presentaban esta dinámica, como Cereté con 43 registros, Lorica con 33 y Sahagún con 27 casos.

En cuanto a homicidios de grupos vulnerables, durante el periodo considerado se vieron afectados tanto los docentes como los sindicalistas, los periodistas, los mandatarios locales, líderes comunitarios e indígenas.

---

<sup>44</sup> Datos de la Alta Consejería para la reintegración.

<sup>45</sup> Para una descripción pormenorizada de la situación de estos 4 municipios, se remite a los siguientes informes de riesgo y notas de seguimiento de la Defensoría del Pueblo que fueron insumo fundamental para la elaboración de este diagnóstico: Defensoría del Pueblo Ciat, Informe de Riesgo No. 18 de 12 de septiembre de 2008; Defensoría del Pueblo Ciat, Nota de seguimiento No. 35 de 13 de octubre de 2008 a Informe de Riesgo No. 006 de 2006; Defensoría del Pueblo Ciat, Nota de seguimiento No. 06 de 29 de febrero de 2008 a Informe de Riesgo No. 006 de 2006; Defensoría del Pueblo Ciat, Nota de seguimiento No. 28 de julio 13 de 2007 a Informe de Riesgo No. 006 de 2006; Defensoría del Pueblo Ciat, Nota de seguimiento No. 4 de 20 de febrero de 2008 a Informe de Riesgo No. 030 de 2006 y Defensoría del Pueblo Ciat, Nota de seguimiento No. 40 de 31 de agosto de 2007 a Informe de Riesgo No. 030 de 2006.

## Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH

Es así como según información proveniente del Ministerio de la Protección Social, entre 2003 y 2007 se registraron 15 homicidios de docentes en el departamento. En 2003, fue asesinado un maestro en Chimá, en 2004 fueron muertos tres profesores en Montería, Tierralta y Sahagún; en 2005, fueron ultimados 4 maestros en Montería y 1 en Puerto Libertador; en 2006 2 fueron muertos en Montería y 1 en Sahagún, Momil y Purísima respectivamente y en 2007 1 fue asesinado en Puerto Libertador. De estas víctimas, 10 eran sindicalizadas (67%) y estaban afiliadas en su totalidad a la Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor); las 5 víctimas restantes no eran afiliadas a ningún sindicato.

En cuanto a los sindicalistas, en 2004 el Sat de la Defensoría del Pueblo elaboró un informe de riesgo en el cuál se señalaban las múltiples amenazas de las autodefensas en contra del Sindicato de Trabajadores Universitarios (Sintraunicol) y de otras organizaciones sindicales, a quienes acusaban de presuntos subversivos. Esta situación era relacionada con la consolidación de las autodefensas en el centro y norte del departamento y con procesos de victimización de las organizaciones sociales. En ese mismo año, se denunció la presión de grupos de autodefensa sobre el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba, para la toma de decisiones acerca de elección de directivas y representantes, así como de la rendición de cuentas<sup>46</sup>. Al respecto, en 2008 se denunció la amenaza en contra de trabajadores, profesores y estudiantes de dicha universidad, en su calidad de víctimas de la confrontación armada o de defensores de los derechos humanos, debido a las denuncias y declaraciones hechas en el marco del proceso de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación<sup>47</sup>.

Adicionalmente, según información del Flip, en marzo de 2006, luego de ser víctima de un atentado en febrero del mismo año, fue ultimado en Montería por desconocidos el periodista de la cadena Radio Panzenú, Gustavo Rojas Gabalo, quién era conductor desde hacía 30 años de un programa en el cuál a menudo denunciaba casos de corrupción de funcionarios y políticos. De otro lado, en septiembre de 2006 se registró también en Montería el homicidio de un pastor evangélico por autores desconocidos.

Ahora bien, en lo atinente a mandatarios locales, de los 30 alcaldes que tiene el departamento, 9 se encontraban amenazados en el año 2003 por cuenta de las Farc en Cereté, Montería, Puerto Libertador, Santero, San Bernardo del Viento, San Pelayo, Tierralta y Valencia y uno más, el alcalde de San Carlos, estaba amenazado por cuenta de la delincuencia común. Según información de la Federación Colombiana de Municipios, en San Bernardo del Viento fue asesinado en octubre de 2006 por desconocidos el ex-alcalde de dicha población, Luis Castillo Oquendo.

Respecto de los concejales, cuatro han perdido la vida entre 2003 y 2007 según Fenacon. En 2004, en enero murió Juan Calderón en Puerto Libertador a manos de las autodefensas y en el mes de febrero fue ultimado por desconocidos Teobaldo Ordoñez en Montelíbano. Posteriormente en agosto de 2006 fue víctima de homicidio Freddy Villa, concejal del municipio de La Apartada, y en abril fue asesinado el diputado Orlando Benítez, junto con su

<sup>46</sup> *El consejero Mancuso*. Semana.com. Septiembre 2004.

<sup>47</sup> Defensoría del Pueblo Ciat, Informe de Riesgo No. 18 de 12 de septiembre de 2008.

## Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH

hermana y un amigo, ambos docentes, en Valencia<sup>48</sup>; en los dos hechos se desconocieron los autores. Finalmente, en diciembre de 2007 desconocidos asesinaron a Rafael Simanca Ramírez, concejal del municipio de San Carlos en la capital departamental.

Por otro lado, desde 2004 informes de riesgo da cuenta de la persecución de los grupos armados ilegales contra organizaciones de tipo social o comunitario<sup>49</sup>, razón por la cual, líderes comunales han sido objetos de homicidios y desapariciones. En este contexto, entre 2003 y 2007, 6 líderes comunitarios han sido asesinados en la región, la totalidad por autores desconocidos, los cuáles se desempeñaban bien sea como miembros de juntas de acción comunal (casos de Eliberto Naranjo y Jairo Pastrana, muertos en Montería en 2004 y Valencia en 2005 respectivamente) o como veedores ciudadanos como Jairo Martínez de la Barrera, asesinado en Moñitos en 2004.

También han sido perseguidos líderes de desplazados, de víctimas o incluso de aquellos que quieren dejar atrás la ilegalidad de los cultivos ilícitos: al respecto, cabe resaltar el homicidio en enero de 2007 de Yolanda Izquierdo, quién lideraba junto a Manuel Argel un comité integrado por 900 familias de parceleros, que pedían la restitución de sus tierras; en este sentido, el jefe de la Policía Judicial de la Unidad de Justicia y Paz había recibido de manos de Izquierdo, más de 700 documentos como pruebas que determinarían que las autodefensas obligaron a los poseedores de las tierras donadas por los Castaño a través Funpazcor a venderlas, las cuáles quedaron en manos de testaferros<sup>50</sup> y cabe anotar que las últimas investigaciones de este hecho apuntan a Vicente Castaño como autor intelectual<sup>51</sup>. Igualmente, dos días antes Freddy Espitia, desmovilizado del EPL en 1990 y coordinador de una organización de desplazados, fue también ultimado, mientras elaboraba el banco de información sobre bienes que el bloque Córdoba había arrebatado a los habitantes de Cotorra<sup>52</sup>. Posteriormente, en el mes de agosto, en San Carlos, zona rural de Tierralta, 12 hombres asesinaron a Rubén Torres, líder comunal de la localidad, que se oponía a los cultivos ilícitos en la zona.

Finalmente, con respecto a las comunidades étnicas, en Córdoba existen comunidades indígenas en los municipios de Purísima, Momil, San Andrés de Sotavento, Chima, Chinú, Ciénaga de Oro, Sahagún, pero sobretodo en Tierralta y Puerto Libertador, en el sur de Córdoba. Por otra parte, la población afrodescendiente se ubica en su mayoría en la zona costera, es decir, en San Bernardo del Viento, Moñitos, Puerto Escondido y Los Córdoba. En la región, se encuentran dos etnias que son los Embera Katío y los Zenú<sup>53</sup>. Por su ubicación geográfica dentro de los territorios en disputa, la comunidad Embera Katío (aproximadamente 500 familias), ha sido la etnia más vulnerada en el departamento. Es así como entre 2003 y 2007, 11 indígenas fueron muertos en San Andrés de Sotavento y Tierralta, de los cuales, 6 eran Embera Katío, 2 Zenú y 3 sin precisar.

---

<sup>48</sup> *El reino de los desmovilizados* Semana.com. Marzo 2006.

<sup>49</sup> Defensoría del Pueblo IR No. 006, 6 de febrero de 2004.

<sup>50</sup> *Siervos sin tierra*. Ob.cit. y *La increíble historia de lo que pasó con las tierras de Fidel Castaño Gil*. Seman.com Diciembre de 2006.

<sup>51</sup> *Vicente Castaño está detrás del crimen de activista: Fiscalía*. Idem.

<sup>52</sup> *Siervos sin tierra*. Ob.cit

<sup>53</sup> *Colombia: Una nación multicultural*. DANE mayo de 2007.

## Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH

En la actualidad, los Embera tienen medidas cautelares otorgadas en 2001 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, originadas en el hecho de que se desarrolló el proyecto Hidroeléctrico de Urrá en su resguardo en Tierralta, que comprende un embalse con capacidad para 32 millones de m<sup>3</sup>, que representa el 17% de la capacidad nacional. A mediados de la década de los noventa, el movimiento indígena inició una campaña de acciones sociales y políticas para obligar a la Empresa Urrá S.A. a cumplir los compromisos adquiridos y al Gobierno nacional a garantizar sus derechos sobre su territorio ancestral. Sin embargo, la defensa de sus derechos los ubicó en la mira de los ataques indiscriminados contra sus territorios y bienes, a tal punto que varios de sus líderes fueron asesinados o desaparecidos, como Alonso Jarupia Domicó, Kimi Pernía Domicó y Augusto Lana Domicó<sup>54</sup>. Tal situación motivó la Declaración de Zambudó en 1999, en la que el pueblo indígena comunicaba su decisión de mantenerse al margen de la confrontación armada; sin embargo, esta declaración no fue respetada por los actores armados<sup>55</sup>.

Adicionalmente, en 1998 la Corte Constitucional tuteló los derechos a la supervivencia, la integridad étnica, cultural, social y económica, la participación y al debido proceso de esta etnia, ordenando al Incora y al Ministerio del Interior unificar en un solo resguardo a la comunidad y a la empresa Urrá, a indemnizar a la comunidad por la vulneración del derecho a consulta previa sobre su territorio, con una indemnización mensual de 135.000 pesos por persona durante 20 años a cada uno de los miembros de la comunidad<sup>56</sup>, lo cual en cierta medida ha provocado la alteración de las costumbres, la pérdida del sentido de lo étnico y lo colectivo, así como el despilfarro por parte de los beneficiarios<sup>57</sup>. En 2007, en medio de una de las más grandes inundaciones que ha sufrido el río Sinú en los últimos 50 años, que ocasionó pérdidas y calamidades a cientos de cordobeses, se retomó la idea de llevar a cabo la segunda fase de este proyecto hidroeléctrico. Lo anterior ha despertado grandes controversias, puesto que algunos argumentan que la construcción de Urra II y por ende la inundación de una gran extensión del Paramillo, contribuirá a dar utilidad a terrenos que son utilizados en la actualidad con fines ilícitos por los grupos armados ilegales, lo cuál redundaría en un aumento de la seguridad en la zona, mientras que otros afirman que se perdería una riqueza intangible por los humedales y ciénagas existentes y se obligaría de nuevo a desplazarse al campesinado existente en la zona, grupo poblacional estigmatizado y excluido de las soluciones amistosas e indemnizaciones de Urrá I<sup>58</sup>.

Cabe resaltar finalmente en este ámbito que uno de los logros más importantes para las Fuerzas Militares fue el reconocimiento por parte de la OEA a la Brigada XI en julio de 2007, que resaltó su labor de sensibilización y

---

<sup>54</sup> *Kimy y los muertos que se tragó el Sinú*. El colombiano. Series especiales. [www.elcolombiano.com](http://www.elcolombiano.com)

<sup>55</sup> Esta situación obligó a que se emitieran a lo largo del período estudiado 4 informes de riesgo (039 del 19 de abril de 2002, 041 del 28 de mayo de 2003, 062 de 2003 y 039 de agosto 15 de 2005) donde se recomendó a la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia iniciar acercamientos con el Cabildo Mayor de Río Verde y Sinú con el propósito de atender las solicitudes.

<sup>56</sup> Sentencia T-652/98. Corte Constitucional 10 de noviembre de 1998.

<sup>57</sup> *¿Humo blanco?* Semana.com Marzo 2005.

<sup>58</sup> Al respecto un análisis de la problemática existente se puede ver en: *La hidroeléctrica de Urrá II*. Víctor Negrete Barrera. En: Indymedia, spetiembre 29 de 2007

## Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH

trabajo armónico con las comunidades del Alto y Bajo Sinú, colocándola como ejemplo ante otras unidades militares que tienen jurisdicción sobre territorios indígenas<sup>59</sup>.

### Masacre

#### Número de masacres y víctimas registradas en Córdoba 2003–2007

	2003	2004	2005	2006	2007
No de víctimas	4	0	0	9	0
No de casos	1	0	0	2	0

Fuente: Policía Nacional

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República

Como se ha anotado anteriormente, en los años sesenta se dio un proceso de colonización de las zonas altas ubicadas en el sur del departamento de Córdoba, a la cual se vinculó estrechamente el EPL, que a partir de los setenta hizo del secuestro, el boleteo y la vacuna ganadera una sofisticada industria. Lo anterior llevó a que algunos hacendados, en alianza con narcotraficantes promovieran la aparición de los grupos de autodefensa en la región.

Como resultado de la acción de estas organizaciones, tan sólo en 1988 murieron 88 personas víctimas de masacres<sup>60</sup>, año durante el cual se presentaron dos masacres emblemáticas en la región; una masacre, ocurrida en Buenavista en el caserío Mejor Esquina el 3 de abril, cuando las autodefensas dieron muerte a 28 personas, una de ellas profesor de la escuela veredal y las restantes 27, en su mayoría jóvenes, cuando celebraban el día de pascua; cabe anotar que 6 de las víctimas eran miembros del Frente Popular, organización política de izquierda que había nacido en 1986 y que era considerado por las autodefensas como el brazo político del EPL<sup>61</sup>. El otro homicidio múltiple sucedió en el municipio de Canalete en la vereda El Tomate, cuyos habitantes eran considerados por las autodefensas como simpatizantes del EPL, cuando el 30 de agosto, hombres armados se apropiaron de un autobús público y mataron a cinco pasajeros, incluido el conductor esposado al volante y posteriormente ejecutaron a otros diez residentes, tras sacarlos de sus casas e incendiaron 22 viviendas<sup>62</sup>.

A partir de 1996, empieza a hacerse manifiesto el incremento de masacres realizadas por las autodefensas en Tierralta, Puerto Libertador y Montelíbano, donde las Farc estaban asentadas. En 2001, se evidencia el más alto número de masacres por la *ofensiva* de las Accu para recuperar el Paramillo, tras haber perdido el dominio sobre varios municipios de la zona. Lo anterior se vio reflejado en la estrategia de terror que tanto los grupos insurgentes como

<sup>59</sup> Documento de las fuerzas militares de seguimiento al proceso con los Embera katíos.

<sup>60</sup> *Panorama actual del Paramillo y su entorno*. Observatorio de DDHH y DIH de la Vicepresidencia de la República. Mayo de 2002, y *El Atlas De La Violencia*. Semana.com. Abril 1989.

<sup>61</sup> *Por Lo Menos Sus Nombres (8) Génesis de la Iniquidad*. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Bogotá Enero de 2005 y *La masacre de la mejor esquina*. Semana.com Mayo 1988.

<sup>62</sup> *Guerra sin cuartel. Colombia y el DIH*. Human Rights Watch 1998, y *18 denuncias diarias contra paramilitares en Colombia* Ob.cit.

## Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH

de autodefensa han utilizado en Córdoba en contra de la población civil, bajo la dinámica de conquista territorial de amigo-enemigo<sup>63</sup>.

Dentro de esta estrategia de terror con fines de provocar el desplazamiento forzado, el abandono de tierras o simplemente impedir la organización comunitaria, se pueden nombrar masacres como la ocurrida en Saiza (Tierralta) en julio de 1999, cuando las autodefensas asesinaron a 13 personas, lo que provocó el desplazamiento de cerca de 500 familias<sup>64</sup> y la sucedida en septiembre de 2000, en la vereda Naín (Tierralta), donde las autodefensas ultimaron a 11 personas y donde a orillas del río Sinú fueron encontrados un año más tarde 11 campesinos con muestras de haber sido asesinados a garrotazos y posteriormente descuartizados con machete<sup>65</sup>.

Dentro de esta estrategia de intimidación de las comunidades, los grupos guerrilleros también fueron responsables de varias masacres, las cuales han tenido un alto subregistro. Dentro de los hechos atribuidos a los insurgentes, se resalta el ocurrido en Tierradentro (Montelíbano), cuando el 2 de noviembre de 2006 al menos 500 hombres de las Farc atacaron el puesto de Policía, causando daños en el comercio y las casas de la localidad, y asesinando a 17 uniformados y tres civiles. Del anterior hecho, fue sindicado por la Fiscalía alias *El Manteco*, cabecilla de los frentes 18 y 58 de las Farc, quién ya había sido condenado a 40 años de cárcel por la masacre de Bojayá, también acusado por la masacre de nueve campesinos en Apartadó, Antioquia, en abril de 2002<sup>66</sup>.

Entre 2003 y 2007, se registraron en el departamento 3 masacres, las cuales dejaron 13 víctimas. En 2006, se presentó el mayor número de masacres del período (2) y de víctimas fatales (9). En enero de 2003, se registró una masacre en Chinú en límites con Montes de María, que dejó 4 víctimas y en 2006 se presentaron dos masacres: una en junio en Pueblo Nuevo, municipio limítrofe con Sucre, que arrojó 5 víctimas fatales y un homicidio múltiple en Los Córdoba, en la zona costera, con 4 víctimas acaecida en el mes de septiembre. En todos los casos, los autores no han sido identificados.

### Secuestro

---

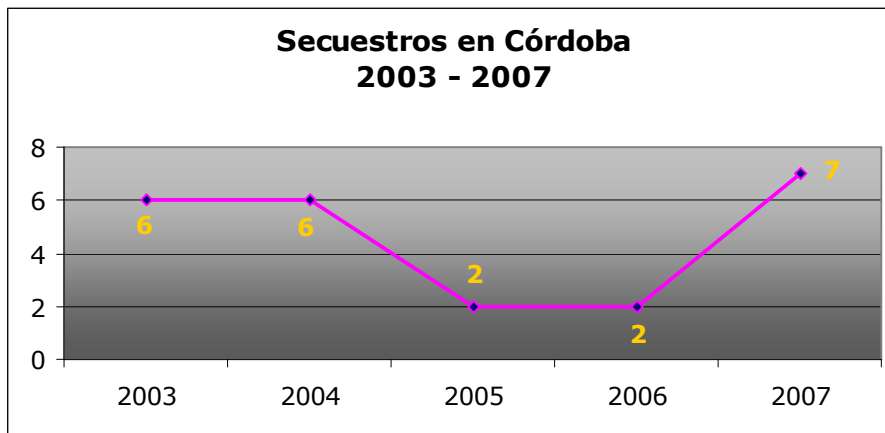
<sup>63</sup> *Guerra contra la sociedad*. Daniel Pécaut. Bogotá, 2001.

<sup>64</sup> Iglesia Presbiteriana en Colombia Julio 22 de 1999. <http://colhrnet.igc.org/urgentaction/799masscordoba>

<sup>65</sup> Base de datos de la sala de estrategia nacional de la presidencia de la república, Bitacora de prensa del observatorio de Derechos Humanos y Cinep.

<sup>66</sup> *Vinculan a Farc en masacre de policías* El Heraldo, 21 de junio de 2007 y *Las Farc atacaron desde las casas de los civiles: Uribe*. El País, 03 de noviembre de 2006.

## Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH



Fuente: Fondelibertad

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República

El fenómeno del secuestro afectó de forma importante al departamento en los años ochenta con el auge del EPL, que utilizaba este delito como una forma de financiar su lucha armada. Posteriormente, en contravía de los principios fundadores de las autodefensas, el registro demuestra que la mayoría de los casos fueron cometidos por este grupo, lo que evidencia su paulatina incursión en el secuestro extorsivo como fuente de financiación para la promoción y agudización de la confrontación. Los municipios cordobeses más afectados a finales de los noventa por este delito fueron Tierralta<sup>67</sup> y Montería.

Con la desmovilización de las autodefensas y la intensificación de las operaciones desarrolladas por las Fuerzas Militares en el sur del departamento, en los últimos años este delito ha venido presentando una tendencia a la baja, a pesar de que las Farc, mayor responsable de los plagios a nivel nacional, actúe en el departamento, pues este grupo en la zona se dedica más a la protección del corredor natural con el Urabá y de las zonas de cultivos ilícitos. Sin embargo, se debe anotar que en 2007 se presentó un ascenso (250%) que puede estar relacionado con la utilización de este tipo de delito en su forma *express* como presión para la cobranza de extorsiones, las cuales han presentado un nivel constante a nivel histórico (4, 11, 7, 11 y 10 registros entre 2003 y 2007) y que tienen como presunto responsable en su mayoría a grupos de delincuencia común (92%) y quienes tienen como víctimas principales en la región a comerciantes.

De acuerdo con datos de Fondelibertad, entre 2003 y 2007 se registraron 23 secuestros en el departamento, de los cuáles 6 ocurrieron en el año 2003, 6 en 2004, 2 en 2005, 2 en 2006 y 7 en 2007. Los municipios más afectados durante el período estudiado fueron Montería con 6 secuestros, Tierralta con 5 y San Andrés de Sotavento y Puerto Libertador con 2 hechos respectivamente. El 35% de los secuestros registrados fueron extorsivos y el 65% restante de carácter simple. Al examinar estos porcentajes por año, se encuentra que los secuestros extorsivos y los simples tendieron a disminuir en 2005 y 2006 en un 67%, pero en 2007 se incrementan en 100% y 400%

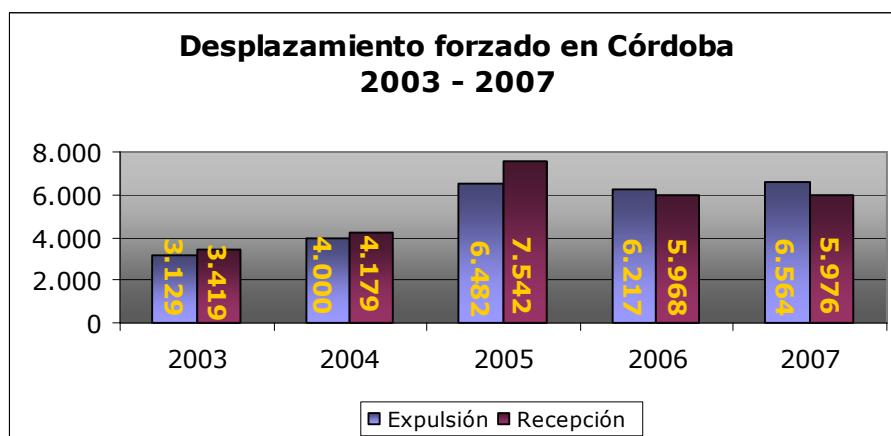
<sup>67</sup> Incluso este municipio llega a registrarse entre 1997 y 2002 junto a Villanueva (Casanare), Tauramena (Casanare), Tierralta (Córdoba), Monterrey Aguazul (Casanare) como uno de los municipios que presentaron el mayor número de personas secuestradas por parte de las autodefensas.

## Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH

respectivamente, presentándose hechos en Montería, Lórica, Tierralta y Puerto Libertador.

En este quinquenio, las Farc fueron responsables del 26% de los secuestros, actuando principalmente en los municipios de Chinú, Puerto Libertador y Tierralta con 1, 1 y 4 plagios respectivamente. En cuanto a la delincuencia común, ésta fue responsable del 52% de los secuestros, afectando especialmente a las poblaciones de Montería (5) y Lórica, Puerto Libertador, Sahagún, San Andrés de Sotavento, San Antero Tierralta y Valencia con 1 secuestro cada uno; familiares de la víctima fueron responsables de 9% de los plagios en Montería y Pueblo Nuevo, y las autodefensas, el ELN y autores sin establecer, del porcentaje restante. De las cifras anteriores, no se puede descartar que por la consolidación del control territorial de la Fuerza Pública, las Farc haya perdido espacio para llevar a cabo secuestros y que hayan subcontratado su comisión a la delincuencia común, que es el mayor autor de este delito en el departamento.

### Desplazamiento forzado<sup>68</sup>



Fuente: Sipod - Acción Social

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República

Como se ha anotado anteriormente, la tenencia y concentración de la tierra en Córdoba siempre ha sido un factor de conflicto, pues ha originado luchas que dieron origen a manifestaciones de intento de reforma agraria violentas y no violentas en la región. Sin embargo, actualmente según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el 77.1% de los predios de Córdoba menores de 20 hectáreas ocupan el 15.7% de la superficie, mientras que el 4.5% de los predios mayores de 100 hectáreas ocupan el 51% de la superficie. Así mismo, el Incora, en los 40 años que funcionó en Córdoba (1963–2003) tituló 387.391 hectáreas de baldíos y adjudicó 134.174 hectáreas por otras modalidades, de los cuales cerca del 40% habían sido adquiridas de manera irregular y forzada. El Incoder, por su parte, recibió del Incora 2.948 solicitudes de familias desplazadas aspirantes a subsidios de tierras, de las cuales 969 (32.8%) dejaron abandonadas 38.738 hectáreas, tanto en Córdoba, como en el Urabá antioqueño y chocoano y reposan 141 solicitudes de campesinos y pequeños propietarios que pidieron protección para 4.338

<sup>68</sup> En el presente informe y por instrucciones de la Agencia Presidencial para la Acción Social, las cifras dan cuenta de la fecha de expulsión de la persona y no la de declaración, tal y como se reportaba hasta la fecha.

## Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH

hectáreas que poseen en distintos lugares del departamento<sup>69</sup>. Poblaciones enteras fueron sometidas al desplazamiento forzado, lo que dejó como consecuencia que en 1994, Montería tuviera 34 barrios de autoconstrucción reciente, en los cuales, el 30% de los habitantes eran desplazados<sup>70</sup>.

Entre 1994 y 1996, con la ocupación por parte de las Farc de los territorios abandonados por las guerrillas desmovilizadas, entre ellas el EPL, el ERP y la CRS, los grupos de autodefensa reiniciaron sus actividades, conformando las Accu, por lo que el desplazamiento aumentó y a medida que avanzaba la incursión de estas estructuras en las regiones aledañas, parte de los desplazados de estas regiones llegaron hasta el territorio cordobés. Entre 1997 y 2001, prosiguió la contienda entre las Farc y las Accu en Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador, por lo que los desplazamientos masivos fueron frecuentes. Se tiene entonces que el desplazamiento en esos años fue producto de acciones de recuperación por un actor y de consolidación por el otro, lo que hizo que las amenazas y ataques a las comunidades fueran violentos por ser actos de retaliación y venganza<sup>71</sup>.

De otro lado, se presentó en el departamento un fenómeno de compra de tierras por parte de narcotraficantes. A partir de los años ochenta, se empezó a hablar en la región de personas provenientes de Antioquia que estaban comprando propiedades y traían personal de seguridad y de labores. A partir de ese entonces, los líderes campesinos que habían dirigido luchas por la recuperación de sus tierras en la década de los setenta empezaron a ser desaparecidos, asesinados y la mayoría desplazados. En la época, cuando se desarrollaba una guerra frontal del Estado contra el Cartel de Medellín, el Das reveló un dossier que explicaba cómo en Urabá y Córdoba se había configurado una verdadera contrarreforma agraria, cuyas tierras pasaron a manos de reconocidos narcotraficantes y nacientes miembros de las autodefensas, que comenzaban a usufructuar el negocio de la seguridad, donde se hablaba de más de 300.000 hectáreas de las mejores tierras del valle del Sinú y de Urabá<sup>72</sup>.

Este panorama explica porque en el departamento, el éxodo se ha caracterizado por ser interno, de tipo individual y de niveles constantes<sup>73</sup>: el ciclo se realiza a partir de la expulsión de las veredas, caseríos o lugares de fincas; la población pasa a las cabeceras de corregimientos cercanos, donde una parte de ella se queda y la mayoría avanza hacia la cabecera del municipio o de otros vecinos y un número más pequeño continúa el éxodo hacia poblaciones más retiradas como Planeta Rica, Montería, Lórica, Cereté o localidades del Bajo Cauca o Sucre. De ahí que el desplazamiento forzado en la región presente cifras semejantes tanto en expulsión como en recepción. Es así como las cifras de Acción Social entre 2003 y 2007 dan cuenta de 26.392 personas desplazadas forzosamente, frente a 27.084 personas recibidas en este departamento. Además, Córdoba presenta un

---

<sup>69</sup> *Los obstáculos al desarrollo de Córdoba*. Op.cit.

<sup>70</sup> Idem.

<sup>71</sup> *Desplazamiento en el Sur de Córdoba*. Acción contra el hambre. 2002. <http://www.disaster-info.net>.

<sup>72</sup> Informe del Das publicado por la Revista Semana, 1989. En: *La Ley De Justicia y Paz En La Costa Caribe*. Indymedia. Julio 2006. <http://colombia.indymedia.org/news>

<sup>73</sup> Entre 2003 y 2007 de 26.392 personas desplazadas en Córdoba, 759 personas lo hicieron por medio de desplazamientos masivos, lo que implica tan sólo el 3% del total de la problemática.

## Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH

aumento en expulsión en el período 2003-2007, con un leve descenso en 2006, así como un crecimiento constante en términos de recepción que evidencia un pico en 2005.

En este quinquenio, el aumento en las cifras de expulsión fue de 110%, registrándose 3.129 en el primer año, 4.000 para 2004, 6.482 en 2005 y aunque en 2006 se presenta una disminución de 4%, al pasar a 6.217 personas expulsadas, en 2007 la cifra aumenta nuevamente a 6.564 registros. En términos de recepción, se ha presentado un constante incremento en el período estudiado, pues en 2003, Córdoba recibió a 3.419 personas, en 2004 a 4.179, en 2005 a 7.542 (lo que representa un aumento del 80%), en 2006 a 5.968 y en 2007 a 5.976 personas, que fueron recibidas en la región.

En este sentido, se debe resaltar que en 2007, Córdoba tuvo un índice de intensidad<sup>74</sup> (II) de 4.34 y un índice de presión<sup>75</sup> (IP) de 3.95 en materia de desplazamiento forzado. A nivel municipal, Tierralta, Puerto Libertador y Valencia presentaron los II e IP más altos de la región, los cuales superaron los índices nacionales con un margen amplio. El primer municipio obtuvo para 2007 el II más elevado en Córdoba (24.8) y un IP de 10.9; el segundo registró un II de 24.4 y un IP de 10.7, mientras que el tercero arrojó para el año pasado un II de 21.3 y el IP más alto del departamento: 26.0. A su vez, el municipio de Montelíbano fue el último que obtuvo un II por encima del promedio nacional en la región (8.4), mientras que La Apartada hizo lo propio en materia de IP con un total de 7.1.

Los municipios que sobresalieron como expulsores fueron Tierralta (7.078), Puerto Libertador (5.342), Montelíbano (4.539), Valencia (3.454) y Montería (1.508). En su conjunto, estas poblaciones representaron el 83% del total de los desplazados. En cuanto a la recepción, los municipios que mayor cantidad de personas desplazadas recibieron fueron Montería con 7.154 personas, Puerto Libertador con 4.130 personas, Valencia con 4.045 personas, Montelíbano con 3.492 personas y Tierralta con 2.391 personas, que constituyen el 78% de la población desplazada recibida en el departamento.

Se deduce entonces que la totalidad de los municipios que conforman el sur de Córdoba son al mismo tiempo regiones expulsoras y receptoras, donde la tendencia actual pasa del desplazamiento colectivo al individual por causa de la confrontación armada y de factores como el reclutamiento forzado o voluntario de jóvenes. La misma dinámica se presenta en la capital departamental, que sigue atrayendo desplazados por calamidades naturales como las inundaciones sufridas en la región entre 2003 y 2007 y por ser el receptor natural histórico de población desplazada; por ello, a pesar de los programas de reubicación, los retornos y de ser una ciudad de paso para

---

<sup>74</sup> El indicador de intensidad (II) del desplazamiento forzado muestra la relación entre el número de personas que salieron de un municipio (expulsión) a causa de factores relacionados con la violencia en medio de la confrontación armada y el total de la población del municipio expulsor proyectado por el Dane para 2007. Este índice tiene en cuenta la relación entre estas dos variables por cada mil habitantes. El II a nivel nacional en 2007 fue de 6.42.

<sup>75</sup> El indicador de presión (IP) del desplazamiento forzado muestra la relación entre el número de personas que llegaron a un municipio (recepción) a causa de factores relacionados con la violencia en medio de la confrontación armada y el total de la población del municipio receptor proyectado por el Dane para 2007. Este índice tiene en cuenta la relación entre estas dos variables por cada mil habitantes. El IP a nivel nacional en 2007 fue de 6.47.

## Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH

muchos<sup>76</sup>, el número de desplazados sigue en ascenso en la capital, donde existen al menos 31 asentamientos subnormales receptores de población desplazada en la actualidad - aunque la movilidad es constante y similar a la presentada en Buenaventura, donde se da el fenómeno del desplazamiento interbarrios, debido a que Montería ha sido y continua siendo centro logístico y de reclutamiento para las diferentes estructuras armadas que han hecho presencia en otros municipios del departamento y regiones del país -<sup>77</sup>.

Dentro de esta problemática, sobresalen actualmente como municipios preocupantes, San Andrés de Sotavento, La Apartada y Planeta Rica con antecedentes de orden público y con tendencia en aumento, Sahagún, Lórica, Chinú, San Bernardo del Viento y San Pelayo, cuyas cabeceras municipales se están llenando de asentamientos marginales, donde los homicidios y otros delitos aumentaron de manera significativa<sup>78</sup>.

Finalmente, respecto del tema de retornos y reubicaciones, Córdoba es uno de los departamentos con más experiencia en reubicaciones de población desplazada. Es así como entre 1997 y finales de 2001, el Incora había adquirido 6 predios en Montería, Valencia y Montelíbano, con un área de 3.482 hectáreas para 357 familias y posteriormente se adquirieron otros 6 predios en Tierralta, Puerto Libertador y Montelíbano, con un área de 2.000 hectáreas para 128 familias<sup>79</sup>. Así mismo, durante 2001 y 2002, se presentaron algunos casos de retornos masivos de población en Tierralta y de reubicaciones en Montería, Valencia y Montelíbano. Por otra parte, en la zona rural de Montería, a partir de la problemática presentada<sup>80</sup>, se adquirieron predios para la reubicación de familias desplazadas en los corregimientos de Las Palomas y Nueva Lucía, cuyos predios fueron llamados El Quindío o Palencú (61 familias) y Los Llantos divididos en La Duda Tomate o Valle Encantado (para 15 familias de Córdoba, Antioquia, Chocó y Guajira) y La Duda Nuevo Horizonte (para 111 familias de Antioquia, Córdoba y Chocó).

---

<sup>76</sup> Esta es una de las razones por las cuales Montería se encuentra en las cifras de municipios expulsores del departamento, situación que no se presenta a nivel nacional, pues comúnmente las capitales departamentales son receptoras por excelencia de población desplazada por el anonimato que ofrecen. Otras razones son que Montería se encuentra aproximadamente a una hora de los municipios del sur de Córdoba considerados críticos en materia de orden público, y además dentro de la misma ciudad, por la abundancia de cinturones de miseria existentes, se presenta alteraciones en materia de derechos humanos como reclutamientos forzados y homicidios de desmovilizados y desplazados, entre otras poblaciones vulnerables, por lo cual Montería no ofrece las condiciones de seguridad que buscan estas personas para quienes el éxodo se convierte en constante.

<sup>77</sup> Defensoría del Pueblo CIAT, Informe de Riesgo 18 de 12 de septiembre de 2008.

<sup>78</sup> *Desplazamiento en el Sur de Córdoba*. Ob. cit.

<sup>79</sup> *El proceso de reubicación de población desplazada por la violencia en predios rurales del municipio de Montería*. Víctor Negrete. ACNUR. Fundación del Sinú. 2002.

<sup>80</sup> Montería actualmente tiene cerca de 45 asentamientos o sectores catalogados como subnormales que son receptores de población desplazada. Para 2001 eran cerca de 31: Brisas del Sinú, Pastrana Borrero, 20 de julio, Camilo Torres, 7 de mayo, 25 de agosto, La Campiña, Cantaclaro, EL Dorado, La Palma, Mogambito, 1 de mayo, El Bongo, La Candelaria, Paz del Río, Robinson Pitalúa, Santa Rosa, 2 de septiembre, Casafinca, 25 de marzo, Ranchos del Inat, Nuevo Milenio, EL Canal, Cantaclaro, Sucre, El Poblado, EL Cerro, EL Enjambre, Villa Fátima, Paraíso, La Esperanza II etapa, Damasco, Edmundo López, 6 de Marzo, Rancho Grande, Mi Ranchito, Nuevo Horizonte, Polvo Parao, Colina Real, P-5, Galilea, Villa Rocío, Nueva Esperanza. En otros asentamientos subnormales, barrios populares, medios y altos la población desplazada está calculada en 10.000 personas aproximadamente. En: *Los Desplazados por la violencia en Colombia. El caso de Córdoba*. Víctor Negrete. Montería, 1994.

## Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH

En relación con lo anterior, se debe anotar que el extraditado Salvatore Mancuso pidió que las tierras ofrecidas en su versión del 7 de diciembre pasado, conocidas como 'Las Parcelas de Costa de Oro', en Córdoba, sean restituidas a los campesinos que las poseían cuando fueron ocupadas por las autodefensas. Sin embargo, se han presentado casos en los cuáles aquellos a los cuales se les ha restituido su derecho a la propiedad, nuevamente están siendo presionados para abandonar sus parcelas<sup>81</sup>.

### *Minas antipersonal*<sup>82</sup>

#### Eventos con MAP en Córdoba 2003 - 2007

Eventos	2003	2004	2005	2006	2007	Total
Accidentes	1	8	15	6	10	40
Incidentes	1	2	3	5	16	27

Fuente: Programa Presidencial de Acción Integral contra Minas Antipersonal.  
Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República

En la actualidad, las Farc han perdido espacio y a juicio de las Fuerzas Militares no cuentan con bases importantes en el sur de Córdoba, donde actúan cada vez menos a través de grandes unidades. A lo anterior, se suma el hecho de que los combates por iniciativa de las Fuerzas Militares se incrementaron desde la iniciación de los diálogos con los grupos de autodefensa, para evitar que las Farc penetrara la zona donde estaba ubicada la Zona de Ubicación Temporal. Paralelamente, se intensificaron las acciones de la Fuerza Pública, con el fin de recuperar la institucionalidad en el Paramillo desde 2004, a través de operaciones tales como *Escorpión*, *Emperador*, *Fulminante*, *Trópico* y *Jungla*. Lo anterior ha llevado a que las Farc siembren minas antipersonal, con el fin de contener el avance de la Fuerza Pública y proteger las zonas con cultivos ilícitos. Por ello, no es casualidad que en Córdoba, esta guerrilla sea la responsable del 46% de los eventos presentados en la región y que en el período analizado, contrariamente a la dinámica nacional, Córdoba sea uno de únicos departamentos donde los accidentes superan los incidentes.

Si bien esta problemática no es tan álgida en Córdoba como en otros departamentos del país, la información disponible indica un aumento de los eventos a partir de 2003, con un incremento considerable en 2005 y 2007. Además, se registró un total de 67 eventos en el período 2003-2007, de los cuáles 40 fueron accidentes y 27 incidentes<sup>83</sup>, lo cual evidencia las claras

<sup>81</sup> En: *Salvatore Mancuso dice que continuará en Justicia y Paz*. En: El Tiempo, mayo 16 de 2008; *Entregarán a sus dueños 1.960 hectáreas que Salvatore Mancuso robó a 126 familias*. En: El Tiempo, 24 de septiembre de 2008.

<sup>82</sup> Según la Ley 759 de 2002, se entiende por accidentes por Map (Minas Antipersonal) o Muse (Municiones abandonadas sin explotar) "un acontecimiento indeseado causado por minas antipersonal, que genera daño físico y/o psicológico a una o más personas" y por incidentes "un acontecimiento relacionado con minas antipersonal, que puede aumentar hasta un accidente o que tiene el potencial para conducir a un accidente".

<sup>83</sup> El sistema de información IMSMA, a través del cual se realiza el monitoreo de todo lo relacionado con minas antipersonal, cambió de versión a partir de junio de 2008, lo cual generó cambios en la estructura de la base de datos, en lo que respecta a los incidentes que ahora son conocidos como "peligros". En aras de darle continuidad a las estadísticas que ha venido publicando el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, se decidió mantener el uso de la palabra incidente según la Ley 759 de 2002. Teniendo en cuenta lo

## Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH

intenciones de la guerrilla de desmoralizar al enemigo y poner en riesgo la vida de la población civil. Del total de los incidentes que se reportan durante todo el período, 7 fueron casos de desminado militar, 3 incautaciones y hubo 17 sospechas de campo minado, especialmente en Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta, Valencia, Sahagún y Ciénaga de Oro.

La tendencia con respecto a los accidentes es creciente, puesto que en 2003 se registró 1 accidente, en 2004 fueron 8, en 2005 se presentaron 15, en 2006 acaecieron 6 accidentes y en 2007 se presentaron 10. Los municipios en los cuáles se concentraron fueron Puerto Libertador (53%), Tierralta (38%), Montelíbano (8%) y la zona rural de Montería (3%). En éstos, el 100% corresponde a los casos ocasionados por minas antipersonal (Map). Entre 2003 y 2007, los 40 accidentes ocasionados dejaron 53 víctimas (20 civiles y 33 militares), de las cuáles 40 resultaron heridas y 13 fueron víctimas fatales. Debe anotarse que, con excepción de una víctima militar en 1994, entre 1990 y 2002 no se registraron ninguna víctima; sin embargo, a partir de 2003, las cifras tienden al ascenso tanto para víctimas civiles como militares, aunque las últimas tuvieron un descenso en 2007 de 82%. Los municipios más afectados, aquellos de intensa confrontación armada, tales como Montelíbano, Puerto Libertador y Tierralta, arrojaron 6 militares heridos y 1 muerto en 2004, 10 heridos y 3 víctimas fatales en 2005, 8 heridos y 3 militares muertos en 2006 y 1 militar herido y 1 muerto en 2007. Respecto de las víctimas civiles, se presentó una víctima fatal en 2003, 2 heridos y 1 muerto en 2004, 5 y 2 civiles heridos en 2005 y 2006 respectivamente y 6 heridos y 3 muertos durante el año pasado.

### Víctimas por Map y Muse en Córdoba 2003-2007

Condicion	Estado	2003	2004	2005	2006	2007	Total
Civil	Herido	0	2	5	2	6	15
	Muerto	1	1	0	0	3	5
Total Civil		1	3	5	2	9	20
Militar	Herido	0	6	10	8	1	25
	Muerto	0	1	3	3	1	8
Total Militar		0	7	13	11	2	33
Total general		1	10	18	13	11	53

Fuente: Programa Presidencial de acción integral contra Minas Antipersonal.  
Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República

### Situación primer semestre de 2008

En términos generales, la situación de derechos humanos en Córdoba para el primer semestre de 2008 en comparación con el mismo periodo del año anterior presenta un sensible deterioro. Sin embargo, se debe resaltar que no se registraron homicidios de alcaldes y ex-alcaldes<sup>84</sup>, sindicalistas de otros

---

anterior, se clasifican como incidentes: las áreas minadas, las áreas peligrosas, el arsenal almacenado, el desminado militar en operaciones, las incautaciones, las municiones sin explotar, la producción de minas (fábrica), la sospecha de campo minado, la sospecha de campo minado por desminado militar y la sospecha de campo minado que genera desplazamiento.

<sup>84</sup> Sin embargo, es necesario resaltar que el 21 de septiembre de 2008, fue asesinado Carlos Alberto Sejín Velásquez, jefe de sistemas de la Alcaldía de Valencia. El funcionario fue

## Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH

sectores, maestros sindicalizados y no sindicalizados, ni periodistas. Además, se presentó una disminución de 33% en el número de los secuestros al pasar de 3 a 2; en 2008, los plagios se realizaron en Tierralta y Montería y fueron cometidos en el primer municipio por la delincuencia común, mientras que no se establecieron los autores del plagio en la capital departamental.

Sin embargo, en materia de desplazamiento forzado, se produjo un aumento en personas expulsadas de 94% en el primer semestre de 2008 con respecto al mismo período del año anterior, al pasar de 2.666 a 5.184 víctimas, comportamiento que se evidencia también en materia de recepción, pues en el primer semestre de 2007 se habían recibido en Córdoba 2.276 personas y para el mismo período en 2008 fueron acogidas 4.697 personas, produciéndose un aumento de 106%. Debe resaltarse que Puerto Libertador, Tierralta, Montelíbano y Valencia fueron los municipios que presentaron los mayores incrementos para las dos tendencias, lo que refleja una tendencia al desplazamiento interveredal o intermunicipal, de manera individual, hacia territorios vecinos con la esperanza de retorno. Sin embargo, cabe anotar que para el primer semestre de 2008 de los 5.184 registros para expulsión, 1.587 personas se desplazaron de manera masiva (31%) y de estos registros, el 88% se realizó desde Puerto Libertador, de donde se desplazaron de manera masiva un total de 1.401 personas.

En cuanto a la problemática del uso de las minas antipersonal, se observa un aumento de 171% en los eventos, al pasar de 7 a 19, donde los accidentes aumentan de 6 a 10 y los incidentes pasan de 1 a 9 para el período considerado; en igual sentido, se ha presentado un aumento en el número de víctimas, al pasar de 6 víctimas en el primer semestre de 2007 a 19 en 2008, donde las víctimas militares que sufrieron heridas fueron las más afectadas, al pasar de 1 a 6 entre los dos periodos considerados.

Paralelamente, se presentó un incremento en los homicidios de 84%, al pasar de 149 víctimas en el primer semestre de 2007 a 274 para el mismo período de 2008. La tendencia histórica desde 2003 se mantiene respecto de la capital departamental y los municipios del sur: Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador, los cuáles ocupan los primeros lugares respecto del incremento; sin embargo, resulta preocupante el alto índice de homicidios cometidos bajo la modalidad de sicariato (66% del total en 2008) y el aumento registrado en municipios que tradicionalmente no presentaban altos índices, como Canalete, Los Córdoba y Puerto Escondido en la zona costera, así como Buenavista y Planeta Rica. Cabe anotar que el municipio de Valencia aunque registra niveles elevados para el segundo semestre de 2008, revela en sus cifras históricas una tendencia constante, pues ha tenido una historia ligada a la confrontación, producto de la lucha por el control político, económico y del narcotráfico, por parte de varios actores armados ilegales. En los últimos años, está marcado por la aparición de estructuras armadas integradas por desmovilizados, integrantes de las autodefensas que no se desmovilizaron y delincuentes comunes, los cuales someten a la

---

interceptado por sicarios que llegaron en una motocicleta hasta su vivienda, y le dispararon en repetidas ocasiones, frete a lo cual varios funcionarios de la Alcaldía de este municipio denunciaron llamadas amenazantes por parte de desconocidos. En: *Asesinan a funcionario de la Alcaldía de Valencia*. En: *El Tiempo* 2008; *Marcha en Valencia por crimen y amenazas contra funcionarios de la Alcaldía*. En: *El Tiempo*, 2008.

## Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH

comunidad a la intimidación y al miedo<sup>85</sup>. En cuanto al homicidio de desmovilizados<sup>86</sup>, entre el primer semestre de 2007 y el mismo período de 2008, los casos aumentaron en un 344%, al pasar de 9 hechos a 40. De éstos, el 50% ocurrió en Montería, el 20% en Tierralta y el 15% en Valencia.

Respecto de la ejecución de masacres en el departamento, mientras que en 2007 no se presentaron casos en la región, entre enero y junio de 2008 se presentó una masacre con un total de 4 víctimas y en los meses subsiguientes dos hechos más, que arrojaron un total de 11 víctimas. De éstos, 2 hechos se presentaron en Puerto Libertador: el primero ocurrió en marzo, cuando a la salida de un establecimiento público, desconocidos que se movilizaban en una motocicleta asesinaron a 4 personas e hirieron a otras 3 y la segunda masacre se presentó en el mes de julio, cuando sicarios asesinaron en el caserío de San Daniel a 5 personas que departían el día de la independencia nacional, que se dedicaban a la recolección de una variedad de palma conocida como palma de aguja<sup>87</sup>. El tercer hecho se presentó en el mes de noviembre en San José de Uré, cuando 10 hombres encapuchados llegaron a una discoteca y dispararon indiscriminadamente contra las personas que se encontraban en el lugar. En el hecho, murieron 6 personas, de las cuáles fueron identificadas 4, quienes eran desmovilizadas de las AUC y eran conocidas con los alias de *Cara de loco*, *Chino*, *Barney* y *Cachaquito*<sup>88</sup>: Sobre el particular, el Ministro de Defensa anunció la apertura de una investigación formal contra 15 policías, entre ellos el comandante de la estación de la población, donde ocurrió el hecho, por una presunta participación en estos hechos<sup>89</sup>.

También se presentó un aumento en el número de homicidios de indígenas, al pasar de 2 víctimas en el primer semestre de 2007 en el municipio de Tierralta a 3 indígenas en este municipio y Puerto Libertador para el mismo período de 2008; la totalidad de las víctimas pertenecían a la etnia Embera Katío. Así mismo, mientras en el primer semestre de 2007 no se presentaron homicidios de concejales, en marzo de 2008 desconocidos asesinaron al concejal David Fernando Padilla Lozano en el municipio de Cereté, el cual con 18 años de edad había sido declarado el cabildante más joven de la Costa y del país.

Además, se debe llamar la atención sobre el homicidio de 2 líderes comunitarios en la región entre enero y junio de 2008 y de 3 líderes más en los meses posteriores, cifra que está por superar la totalidad de los homicidios cometidos contra este grupo vulnerable en el quinquenio estudiado. De los hechos, 4 se presentaron en Tierralta y 1 en La Apartada y las víctimas dirigían proyectos productivos para desmovilizados (casos de

---

<sup>85</sup> En: Defensoría del Pueblo CIAT, Informe de Riesgo 038 de 25 de Diciembre 2007.

<sup>86</sup> Datos de la Alta Consejería para la reintegración.

<sup>87</sup> En: Guerra De Bandas Ex 'Paras' Desangra a 7 Departamentos. En: El Tiempo, 28 de Julio de 2008; Siete campesinos fueron masacrados en Córdoba. Colprensa, 21 de julio de 2008; En hechos aislados matan a 7 en Bijao. En: El Meridiano de Córdoba, 22 de julio de 2008; Campesinos huyen después de masacre en San Daniel. En: El Universal 23 de julio de 2008; Capturan a líder de banda de sicarios responsable de la masacre de Puerto Libertador, Córdoba. En: El Heraldo noticias 1 de agosto de 2008; Culpan a ex paramilitares de asesinar a 5 en Colombia. En: People daily, 23 de julio de 2008

<sup>88</sup> En: Doce muertos y seis heridos dejan dos masacres cometidas este fin de semana en la Costa Caribe En: El tiempo 9 de noviembre de 2008.

<sup>89</sup> Alianza entre policías y 'narcos' en masacre de San José de Uré (Córdoba) reveló Mindefensa. En: El Tiempo, viernes 14 de noviembre de 2008.

## Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH

Carlos Londoño y Ázael Hernández) o lideraban y defendían programas gubernamentales de erradicación de cultivos ilícitos, tales como Familias guardabosques (hechos en los cuáles fueron asesinados Edilberto Trespacios, Julio Martínez y Antonio Jaramillo)<sup>90</sup>. Sobre estos últimos casos, se debe llamar la atención sobre la compleja problemática que viven las personas que le están apostando a los cultivos lícitos, las cuáles reciben la presión de los grupos armados ilegales, a través de constantes amenazas sobre sus tierras, sus familias o sus líderes como lo demuestran los hechos anteriores, o bien a través el sabotaje de los cultivos lícitos y la resiembra de cultivos ilícitos para que cuando el funcionario de Acción Social realice la revisión respectiva, elimine los subsidios para dichas familias por el supuesto abandono del Programa, situaciones que hacen muy difícil la permanencia y la confianza de la población en dichos programas.

Sin embargo, se debe resaltar que en el marco de los esfuerzos de la Fuerza Pública para proporcionar seguridad en la región, se han desarrollado 35 operaciones en contra de la banda emergente de *Don Mario* que terminaron con la captura de 48 de sus integrantes, la individualización de 62, la judicialización de 4 y la ocupación con fines de extinción de dominio de bienes en Montería y Tierralta, así como la ejecución de 31 operaciones en contra de la banda *Los Paisas*, en las cuáles fueron individualizadas 39 personas, capturados 36 de sus integrantes, judicializados cinco y a los cuáles se les decomisaron 53 armas de fuego. Entre los hechos individuales más importantes, se destacan la captura de alias *08*, segundo después de Salvatore Mancuso, junto con Francisco Javier Silva Vallejo, alias *Julián*, el máximo jefe de la banda *Los Paisas* y Eduardo Mario Galeano Doria, alias *El Profe*, jefe de la organización *Los Traquetos*, que se habían aliado para luchar contra la organización *Héroes de Castaño*; respecto de esta última, las autoridades colombianas detuvieron en Cartagena a Jhon Freddy Manco alias *El Indio* o *Alberto*, segundo al mando de esta banda criminal<sup>91</sup>.

Adicionalmente, la Fiscalía General de la Nación vinculó en abril a 7 miembros adscritos a la Brigada XI del Ejército (1 teniente coronel, 1 mayor, 1 sargento y 4 soldados profesionales) para que respondieran por los cargos de homicidio y concierto para delinquir en una investigación por presuntos nexos con grupos ilegales armados dedicados al narcotráfico. De otro lado, se vinculó a cerca de 65 miembros de las Fuerzas Militares en la investigación que trata de esclarecer los hechos de la masacre de La Resbalosa en Tierralta, ocurrida en 2005, por lo cual ya están detenidos como presuntos coautores de homicidio en persona protegida y actos de

---

<sup>90</sup> En: Crimen de líderes comunales se estarían dando por retaliaciones. En: El Universal. 2008. Asesinan a presidente de Junta de Acción Comunal de vereda de Córdoba. En: El Tiempo 22 de octubre de 2008.

<sup>91</sup> En: Cuerpo élite de la Policía de 400 hombres para buscar a alias 'Don Mario' en Córdoba. En: El Tiempo, febrero 8 de 2008; *Homicidios aumentaron en un 127%*. En: El Universal, 29 de septiembre de 2008; *Uribe preside en Montería consejo de seguridad por aumento de asesinatos de desmovilizados*. En: El Tiempo, abril 13 de 2008; *Capturan en Córdoba a alias '08' tercero después de Carlos Castaño y Mancuso en las Auc*. El Tiempo, Abril 16 de 2008; *Detienen a dos jefes de nuevas bandas y a otros cuatro presuntos paramilitares*. En: Terra, 2008; *Detenido el segundo al mando de un nuevo grupo paramilitar colombiano*. En: Agencia EFE agosto 5 de 2008; *Fiscalía ocupa bienes de 'Don Mario'*. En: Semana, Martes 28 Octubre de 2008.

## Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH

terrorismo, 1 capitán, 1 teniente, 1 subteniente, 3 suboficiales y 1 sargento segundo, así como 4 integrantes de las autodefensas<sup>92</sup>.

De otro lado, en la materia referente a las víctimas que exigen sus derechos ante la ley de Justicia y Paz, se debe anotar que el Comité Civil de Víctimas del departamento de Córdoba, Comfavic, agrupa actualmente a 7.800 familias, tiene a la fecha 8.000 denuncias existentes y recibe entre 12 y 15 denuncias diarias, de las cuáles casi la mitad de las trasladadas a la Fiscalía en Bogotá, han desaparecido; esta organización ha recibido en Córdoba alrededor de 2.000 denuncias sobre desapariciones, 3.000 sobre homicidios y 4.000 sobre desplazamientos forzados. Desafortunadamente, en 2008, 5 víctimas murieron a la espera de la reparación en el departamento de Córdoba<sup>93</sup>.

### Conclusión

La disputa entre las Farc y las autodefensas en Córdoba se ha caracterizado por una estrategia de terror adelantada bajo la lógica de amigo-enemigo, según la cual la incursión de cada grupo en un municipio estuvo acompañada de prácticas de venganza y retaliación en contra de la población civil. Lo anterior, sumado a la influencia del narcotráfico y la concentración de tierras en el departamento ha provocado una grave crisis socioeconómica en la región, donde el desplazamiento forzado, la estigmatización de la población y la concentración de un gran número de desmovilizados que no han sido vinculados de manera efectiva al desarrollo de la región, son los indicadores más críticos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de desarrollar políticas públicas en materia de derechos humanos.

Es importante destacar que aunque la problemática más álgida en cuanto a la confrontación armada se desarrolla en el sur del departamento, se debe adoptar una estrategia de seguridad integral para la totalidad de la región, pues en el análisis se evidenció que aunque en números absolutos no constituyen situaciones críticas, algunos municipios costaneros han empezado a registrar violaciones en los derechos humanos de la población, lo que puede indicar una posible difusión de la disputa de grupos armados ilegales hacia estos corredores estratégicos de la Costa Caribe, que pueden mostrar un subregistro debido al interés de la bandas emergentes en mantener un *bajo perfil*.

Así mismo, aunque se han presentado avances innegables y resultados destacables de la Fuerza Pública, resulta imprescindible acertar en el diagnóstico sobre la naturaleza de las nuevas estructuras armadas, para elegir una estrategia efectiva e integral, pues aunque la finalidad esencial de estas bandas es el negocio del narcotráfico, en su intento de dominio

---

<sup>92</sup> En: *Ejército Colombia entrega 7 militares en investigación criminal*. En: Reuters 16 de abril de 2008; *Ordenan la detención de un paramilitar por matanza de personas protegidas*. En: Univisión, 30 de abril de 2008; *La Justicia se abstiene de detener a 65 militares colombianos por una matanza*. En: Terra 20 de junio de 2008

<sup>93</sup> En: *Esta semana visite a Montería*. Columna de Iván Cepeda. En: El Espectador, 9 de mayo de 2008; *Víctimas de las AUC se están muriendo antes de la reparación*. En: El Heraldo, julio de 2008; *El exterminio de los Padilla*. En: Semana, septiembre 20 de 2008.

## **Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH**

territorial amenazan, intimidan y asesinan a quienes consideren contrarios a sus intereses, por lo que líderes cívicos, sindicalistas, dirigentes sociales y líderes erradicadores han sido asesinados. En este sentido, la estrategia institucional no sólo tiene que neutralizar los factores económicos que permiten su expansión, sino también orientarse a implementar un esquema de seguridad adecuado para esta población.

Adicionalmente, se recomienda contar con la iniciativa de las instituciones locales en temas claves como el fortalecimiento de asociaciones comunitarias y organizaciones sociales en el departamento, que están dispersas y presentan períodos frecuentes de inactividad. Así mismo, es urgente ante el gran número de víctimas presentes en la región, en su mayoría campesinos, capacitarla acerca de temas importantes en sus reivindicaciones como el proceso de reparación, ofrecerles mayor seguridad, y promover un lugar de recepción de denuncias más cercano, pues actualmente los jueces y tribunales quedan en Barranquilla, Medellín y Bogotá, dificultando su desplazamiento, lo que debe redundar además en un fortalecimiento inmediato de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación que opera en la región, que tiene que adelantar un labor titánico con recursos insuficientes. Además, es menester iniciar y fortalecer iniciativas de apoyo a la reconciliación por parte de las instituciones oficiales entre la población y los desmovilizados que tienen una presencia mayoritaria en la región.

A su vez, frente a la problemática expuesta en el presente diagnóstico respecto de la población desmovilizada, se debe anotar que la política pública actual ha evidenciado una escasez de proyectos productivos y de estrategia para integrarlos en el mercado laboral. Sumado a lo anterior, la reintegración social no ha sido tomada como una vía fundamental hacia la reinserción del desmovilizado a la sociedad, lo que ha impedido que esta persona se considere como parte activa y responsable de la sociedad y ha dificultado la aparición de líderes naturales como facilitadores de la integración de esta población hacia fines legales y la reivindicación de sus intereses frente al Estado. Lo anterior ha llevado en muchos casos al abandono del proceso y por ende los ha expuesto a un mayor riesgo frente al reclutamiento voluntario o forzado por parte de organizaciones armadas. Esto denota un incremento en su vulnerabilidad, pues los índices de homicidio contra los desmovilizados han alcanzado niveles preocupantes en la región, producto del ajuste de cuentas entre nuevas bandas emergentes cuando el desmovilizado decide rearmarse o frente a su negativa de volver a delinquir, panorama que requiere de estrategias efectivas, reales e inmediatas que tomen en cuenta la caracterización y las condiciones específicas de los beneficiarios de dichas medidas.

Finalmente, está demostrado que los indicadores evidencian las zonas críticas y los movimientos de los protagonistas de la confrontación sobre el territorio, por lo que constituye una guía insustituible en el direccionamiento de las acciones tendientes a proteger la población civil y a garantizar la plena vigencia de sus derechos.

## Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH

Anexos

### Homicidios y tasas de homicidios en Córdoba a nivel municipal 2003-2007

Municipio	2003		2004		2005		2006		2007	
	No Homicidios	Tasa	No Homicidios	Tasa	No Homicidios	Tasa	No Homicidios	Tasa	No Homicidios	Tasa
AYAPEL	1	1,72	2	3,37	1	1,66	7	16,17	15	34,04
BUENAVISTA	3	19,47	9	58,56	1	6,53	5	25,98	6	30,78
CANALETE	2	15,50	0	0,00	0	0,00	5	28,29	5	27,70
CERETE	27	30,93	9	10,12	11	12,15	13	15,36	7	8,20
CHIMA	4	34,66	4	34,83	2	17,50	0	0,00	2	14,39
CHINU	13	32,36	5	12,35	0	0,00	1	2,29	4	9,06
CIENAGA DE ORO	10	25,39	4	10,26	4	10,38	3	5,54	10	18,13
COTORRA	1	5,63	4	22,16	2	10,91	2	13,22	2	13,19
LA APARTADA	3	20,08	1	6,57	3	19,37	3	23,19	2	15,20
LORICA	12	9,64	17	13,44	6	4,67	8	7,21	7	6,26
LOS CORDOBAS	2	20,57	3	31,23	1	10,55	6	32,70	4	21,20
MOMIL	1	9,44	1	9,52	0	0,00	3	21,17	0	0,00
MONTELIBANO	4	7,53	16	29,57	14	25,41	43	57,44	45	58,82
MONTERIA	70	20,64	67	19,50	46	13,21	56	14,55	73	18,67
MONITOS	2	8,54	4	16,80	4	16,53	1	4,18	0	0,00
PLANETA RICA	10	16,84	5	8,38	6	10,01	3	4,82	10	15,94
PUEBLO NUEVO	1	3,49	3	10,29	1	3,37	7	21,77	12	36,58
PUERTO ESCONDIDO	2	17,89	3	27,06	2	18,21	0	0,00	4	17,36
PUERTO LIBERTADOR	7	29,20	9	36,82	13	52,18	13	35,77	44	117,26
PURISIMA	0	0,00	2	12,82	2	12,64	1	6,80	0	0,00
SAHAGUN	15	11,39	12	8,91	3	2,18	13	14,81	13	14,77
SAN ANDRES SOTAVENTO	6	12,68	5	10,67	3	6,46	3	4,64	0	0,00
SAN ANTERO	13	67,80	2	10,36	3	15,45	2	7,52	4	14,77
SAN BERNARDO DEL VIENTO	8	27,59	7	23,96	2	6,79	2	6,31	6	18,76
SAN CARLOS	9	52,13	7	40,93	3	17,72	0	0,00	2	8,25
SAN Pelayo	4	11,06	13	35,37	3	8,03	8	20,18	9	22,48
TIERRALTA	18	28,76	14	22,54	31	50,33	46	57,04	60	72,68
VALENCIA	4	14,76	2	7,35	6	21,96	4	11,38	6	16,71

Fuente: CIC de la Policía Nacional  
Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República

### Situación de Derechos Humanos en Córdoba 2003-2007

	2003	2004	2005	2006	2007
Homicidios	252	230	173	258	352
Víctimas de masacres	4	0	0	9	0
Casos de masacres	1	0	0	2	0
Homicidios de alcaldes y exalcaldes	0	0	0	0	1
Homicidios de concejales	0	2	0	1	1
Homicidios de indígenas	6	1	1	1	2
Homicidios de maestros sindicalizados	1	2	4	2	1
Homicidios de maestros no sindicalizados	0	1	1	3	0
Homicidios de sindicalistas de otros sectores	0	0	0	0	0
Homicidios de periodistas	0	0	0	1	0
Secuestro	6	6	2	2	7
Desplazamiento forzado (expulsión)	3.129	4.000	6.482	6.217	6.564
Eventos por minas antipersonal	2	10	18	11	26
Accidentes	1	8	15	6	10
Incidentes	1	2	3	5	16
Civiles heridos por Map	0	2	5	2	6
Civiles muertos por Map	1	1	0	0	3
Militares heridos por Map	0	6	10	8	1
Militares muertos por Map	0	1	3	3	1

Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República

## Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH

### Situación de Derechos Humanos en Córdoba Enero-junio 2007 y 2008

	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>Variación %</b>
Homicidios	149	274	84%
Víctimas de masacres	0	4	100%
Casos de masacres	0	1	100%
Homicidio de alcaldes y exalcaldes	0	0	0%
Homicidio de concejales	0	1	100%
Homicidio de indígenas	2	3	50%
Homicidios de maestros sindicalizados	0	0	0%
Homicidios de maestros no sindicalizados	0	0	0%
Homicidios de sindicalistas de otros sectores	0	0	0%
Homicidios de periodistas	0	0	0%
Secuestro	3	2	-33%
Desplazamiento forzado (expulsión)	2.666	5.184	94%
Eventos por minas antipersonal	7	19	171%
Accidentes	6	10	67%
Incidentes	1	9	800%
Civiles heridos por Map	5	9	80%
Civiles muertos por Map	0	2	100%
Militares heridos por Map	1	6	500%
Militares muertos por Map	0	2	100%

Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República